

EL DERECHO A LA REDENCIÓN DE LA PENA

**EL DERECHO A LA REDENCIÓN DE LA PENA, Y LA RESOCIALIZACIÓN: UNA
APROXIMACIÓN AL CASO COLOMBIANO.**

MARÍA BERNARDA MARTES ORTEGA.

ADRIÁN JESÚS MOLINA BORJAS.

TRABAJO DE GRADO PARA OPTAR EL TÍTULO DE ABOGADO

UNIVERSIDAD DE LA COSTA, CUC.

DEPARTAMENTO DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS.

PROGRAMA DE DERECHO.

BARRANQUILLA, COLOMBIA 2021.



EL DERECHO A LA REDENCIÓN DE LA PENA

Resumen.

La redención de la pena y la resocialización son dos principios fundamentales en el ámbito del derecho penal, constituyéndose en la función social de la pena que tiene por finalidad reeducar al ciudadano que ha incurrido en un delito para conseguir su reinserción y readaptación a la sociedad.

Colombia, en la Constitución política de 1991 se instituyó como Estado Social de Derecho, de lo que se desprende la obligación de ser garante de la materialización de los derechos de sus asociados, en especial los inherentes a la dignidad humana. Obligación que no se desvanece cuando estos se encuentran en prisión, en sentido contrario la facultad legítima que posee el Estado de privar a quien comete un delito de su libertad entraña en el mismo acto la obligación de garantizar sus derechos durante el cumplimiento de la pena.

La presente investigación tiene como fin primordial analizar la situación de los derechos de los reclusos en las cárceles colombianas, a través de la literatura existente; primero se realizará una aproximación conceptual al estudio de la redención de la pena y la resocialización los privados de la libertad en Colombia; para posteriormente realizar una revisión a la garantía de los derechos fundamentales de los reclusos contrastado con el estado de cosas inconstitucionales en el sistema carcelario y penitenciario en el país declarado por la Corte Constitucional, que derivará en una crítica frente a la vigencia y efectividad de los derechos de redención de pena y resocialización y los derechos humanos de los prisioneros en Colombia.

EL DERECHO A LA REDENCIÓN DE LA PENA

Palabras claves: Derecho de redención, resocialización, Estado Social de Derecho, sistema carcelario y penitenciario, estado de cosas inconstitucionales, derechos humanos.

Abstrac

The redemption of the sentence and the re-socialization are two important figures in the criminal scene of a social State Law. Therefore, the institutionality aims to re-educate the citizen who has committed a crime so that when they re-enter society it is useful to this one as her family. In this way, Colombia, as a State that guarantees social rights that are represented in the 1991 Constitution, has the obligation to respect the human dignity of all its citizens, even when they are under pressure.

Therefore, the main purpose of this research is to analyze the situation of the rights of prisoners in Colombian prisons, through the existing literature. Thus, there will be a broad panorama if the Colombian State respects and guarantees the effectiveness of human rights and fundamental rights, as well as the right of redemption and resocialization.

Keywords: Ringt of redemption, resocialization, social state of rights, jail, Society, re.education, human ringt.

EL DERECHO A LA REDENCIÓN DE LA PENA

Contenido

Capitulo II. Marco teorico	19
2.1 antecedentes de la investigacion	19
2.2. Bases teóricas	32
2.3. Referente histórico	39
2.4. Marco conceptual.	45
2.5. Marco legal.	48
2.5.1. Fundamento normativo	48
Capitulo III	62
3. Diseño metodológico	62
3.1. Método de investigación	62
3.4. Análisis y discusión de los resultados.	63
3.4.1. Fundamento jurídico del derecho a la redención de pena de los condenados a prisión en colombia.	63
3.4.2. El impacto de la resocialización de los privados de la libertad en colombia.	73
Conclusiones	91
Rferencias	93

EL DERECHO A LA REDENCIÓN DE LA PENA

DEDICATORIA

“No te esfuerces tanto, las mejores cosas suceden cuando menos te las esperas”

--Gabriel García Márquez

Maria Bernarda Martes Ortega

Dedico esta meta principalmente a Dios, por siempre mantenerme firme y no dejarme decaer, a mi padre Álvaro Martes que ha sido mi apoyo en todo este tiempo, y a mi madre Dolores ortega, que aunque ya está gozando de la presencia de Dios, por su recuerdo en memoria he luchado y salido victoriosa siempre, a mi hija Victoria que es el motivo por el cual inicie este camino y me dio fortaleza. A mi hermano Fernando Miguel, mi filósofo favorito por siempre escucharme, guiarme y apoyarme como solo los hermanos lo saben hacer.

Adrián Jesús Molina Borja

Hasta la más hábil oveja de un gran rebaño, por audaz y capaz que sea necesita de un buen pastor. Un pastor que impulsa desde el corazón pero que siempre te inclina a la razón.

Mi pastor es un pastor bondadoso, piadoso, creador de vida dentro de la vida, un pastor que colma mi camino de bienaventuranza en cada paso que doy, por ello dedico mi tesis principalmente a Dios, el omnipotente del universo no se equivocó en su creación y me ha otorgado las herramientas necesarias para alcanzar este logro.

Gracias Dios...

EL DERECHO A LA REDENCIÓN DE LA PENA

A mi padre Miguel Antonio molina Bolívar mi prueba más fehaciente que los hombres buenos si existen y pueden ser aún mejores si se dejan guiar y deciden formarse, pues el estudio es la base de toda sociedad, esa que inicia desde el hogar.

A mi madre Ada Guísela Borjas la que me ha enseñado que Dios existe, que no hay límites si caminamos con fe. Ella es la muestra más sublime que el amor todo lo puede, su insaciable espíritu de lucha me enseñó a convertir las dificultades en ventaja y que las incapacidades son mentales cuando se quiere salir adelante.

A mi tía Isidora Molina Bolívar quien, con tanta entrega, dedicación y mucho amor decidió ser esa mano amiga, ese apoyo incondicional que a pulso me ha enseñado estos últimos 9 años la esencia de ser un adulto responsable, íntegro, pero sobre todo capaz. Gracias tía.

A Dios gracias por su bondad, por haberme dado los mejores pastores, las mejores guías que con su amor y entrega pudieron hacer posible el milagro de la superación en mí.

EL DERECHO A LA REDENCIÓN DE LA PENA

Capítulo I

1.1 Planteamiento del problema

Los derechos de las personas son importantes en cualquier sociedad. El hecho de que una persona sea rica o pobre no determina que una tiene más derechos que la otra, pues todos son iguales ante la ley. En ese contexto, la garantía de derechos se debe aplicar a todos los seres humanos, aun cuando estos hayan cometido un acto reprochable para la sociedad. Es decir, un delincuente no pierde sus derechos absolutamente sólo por el acto delictivo, al contrario, este sigue gozando de algunos derechos plenamente como la salud, la vida etc., aun cuando se les debe limitar otros como la libertad.

En sentido de lo anterior, en Colombia desde hace más de una década viene atravesando severos problemas dentro de su sistema penitenciario y carcelario, entre los que destacan: el hacinamiento, deficiencia en la salud, problemas en la infraestructura de los centros penitenciarios, educación, alimentación, entre otros aspectos, que han generado la constante queja por parte de la sociedad organizada, las ONG, y los familiares de los reclusos, quienes denuncian que estas fallas ocasionan una sistemática vulneración de los derechos de los privados de la libertad.

En cifras oficiales proporcionadas en el Boletín No. 100 del INPEC, a inicios del año 2020, la capacidad máxima, para el total de los 132 establecimientos penitenciarios del país, era de 80.156 personas, pero el número real de reclusos ascendía a 124.188, lo que equivale a un índice de hacinamiento del 54.9 %, un resultado alarmante que evidencia la grave crisis del sistema.

La profunda crisis institucional del sistema penitenciario y carcelario en Colombia ha llevado a la reiterada declaración por la Corte Constitucional, del estado de cosas inconstitucional en las

EL DERECHO A LA REDENCIÓN DE LA PENA

cárceles colombianas, hecho que genera una grave afectación a los derechos fundamentales tanto de los reclusos como de sus familias, en cuanto a la salud, salubridad pública, la vida en condiciones de dignidad, el orden público, entre otras vulneraciones a derechos conexos, esto en contravía no solo del Estado Social de Derecho, sino también de los fines esenciales, los principios y valores del Estado.

Lo anterior se vio agudizado con la pandemia generado por la COVID-19, motivando que los privados y privadas de la libertad se organizaran en jornadas de protestas en procura de la implementación de medidas para evitar el riesgo y la propagación del COVID-19, lo que condujo a que el Ministerio de Justicia y el INPEC decretaron el estado de emergencia en los centros penitenciarios del país. (Cano, 2020).

Hernández (2019), ofrece un balance poco alentador con relación a la garantía y efectividad de los derechos humanos en los centros penitenciarios y carcelarios de Colombia, que evidencia que pese a los avances constitucionales y legales se mantiene la deuda histórica del Estado colombiano como las personas privadas de la libertad, las cuales sufren condiciones degradantes de la dignidad humana en los centros de reclusión, las cuales por su especial condición, son consideradas por la comunidad internacional como personas en condiciones de vulnerabilidad bajo custodia del Estado.

Para el autor, el Estado colombiano ha sido incapaz de cumplir materialmente lo ordenado por la Carta Política, y reiterado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre la garantía de los derechos de la población privada de la libertad. El artículo hace un estudio sobre las modalidades de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes vividos permanentemente por las personas privadas de la libertad (PPR) y de las causas del aumento significativo de los casos de suicidio y muertes violentas de los reclusos en los centros carcelarios y penitenciarios del país.

EL DERECHO A LA REDENCIÓN DE LA PENA

De tal manera, que el problema central que sufren los presos de Colombia se vincula con la omisión de brindarles garantías de derechos, lo que se traduce a que no se les da una vida digna carcelaria, lo que hace que fallen mecanismo jurídicos como la resocialización, pues como lo han dicho muchos expertos, la resocialización no está resocializando a un gran porcentaje de reos, pues en las prisiones se evidencia más delincuencia como la extorción, la prostitución, drogadicción; sumándose falta de agua potable, infraestructura eficaz, entre otros elementos propios para la buena convivencia y la restauración del ser humano que ha caído en actos ilegales que contradicen y fracturan a la sociedad.

1.2. Formulación del problema

Esbozados algunos de los componentes que integran el complejo panorama de vulneración de los derechos fundamentales de las personas reclusas en prisión en Colombia, resulta pertinente formular una pregunta problema que se constituya en faro de esta investigación, y que permita una aproximación a la realidad del escenario penitenciario en el país, y como este posibilita o no la garantía de derechos fundamentales de los privados de la libertad. Desde lo anterior, se pretende edificar una crítica a la aplicabilidad y las garantías iusfundamentales de orden constitucional y legal de esta población.

Así, la pregunta problema es:

¿Cómo puede el Estado colombiano superar el estado de conductas inconstitucionales en el sistema carcelario y penitenciario para garantizar los derechos fundamentales y la dignidad humana de los reclusos y reclusas?

EL DERECHO A LA REDENCIÓN DE LA PENA

1.2 objetivos

1.2.1 objetivo general

Analizar como el Estado colombiano puede superar el estado de conductas inconstitucionales en el sistema carcelario y penitenciario para garantizar los derechos fundamentales y la dignidad humana de los reclusos y reclusas

1.2.2 objetivos específicos

- Identificar el fundamento jurídico del derecho a la redención y la resocialización en Colombia.
- Caracterizar los derechos fundamentales de los reclusos con el estado de conductas inconstitucionales en el sistema carcelario y penitenciario en el país.
- Determinar una posición crítica frente a la vigencia de derechos de redención de pena y resocialización en relación con las particularidades del sistema penitenciario y carcelario colombiano.

1.2 Justificación

El presente es importante porque es necesario hacer una revisión y análisis de los problemas que ha tenido y tiene el derecho de redención y resocialización en Colombia, como estos están vinculados con el estado de las cosas inconstitucionales. Por tanto, es transcendental tener claro cuáles han sido los problemas presentados desde 1998 en las cárceles a nivel de garantías de derechos para saber que se ha superado, qué problemas se sostienen y qué se puede proponer o se ha propuesto para superarlos.

EL DERECHO A LA REDENCIÓN DE LA PENA

De modo que, se considera también útil esta investigación porque no sólo se limita a hacer una revisión pasiva de los problemas presentado en las cárceles en materia de derecho y resocialización, sino que busca contribuir a la construcción de sugerencias para hacer más sólida la acción de la resocialización en los reos, y así tenga una materialización real y evidenciable.

Entonces es de entender que este trabajo quiere contribuir en la solución de un problema en las cárceles de Colombia, el cual se vincula con la efectividad de la redención de la pena y la resocialización, dado que se está convencido de que sí se puede tener en la nación cárceles que, en cambio de castigar indolentemente, restauren vidas de ciudadanos que salgan siendo útiles para su familia, para ellos mismo y la sociedad.

Lo anterior exige hacer toda una revisión exhaustiva en lo relacionado con pronunciamientos de la Corte Constitucional sobre el estado de las cosas inconstitucionales en las cárceles de Colombia, además de los trabajos que ya han tratado la situación jurídica y real del derecho de redención y resocialización, así mismo, cotejar los aportes, problemas comunes, soluciones comunes y definir conclusiones claras que lo que se necesita para avanzar en la materia de cárceles más humanas y resocializadoras en Colombia.

Para hacer más comprensible lo anterior, se puede decir que, el objetivo fundamental de este trabajo de investigación es desentrañar la problemática estructural del sistema penitenciario y carcelario en Colombia, que impide la redención y la resocialización del condenado. Lo enunciado genera un quebranto, una fractura en la sociedad, que imposibilita la materialización de los principios del Estado y de la pena en cuanto su naturaleza de conformidad con lo previsto en el ordenamiento jurídico nacional.

EL DERECHO A LA REDENCIÓN DE LA PENA

En Colombia los condenados a prisión, sin merito discriminatorio, cuentan con la garantía de la prevalencia de sus derechos, es este orden de ideas un privado de su libertad, no es sujeto a quien que se despoja de sus derechos, existe con ocasión de la condena una restricción a algunos de ellos sin desmedro de sus derechos fundamentales en especial los inherentes a la dignidad humana; en tal sentido la Corte Constitucional se pronunció manifestando que, la “*persona a pesar de tener suspendido su derecho a la libertad física, aún es titular y ejerce sus otros derechos fundamentales, los cuales sólo pueden ser restringidos en menor o mayor magnitud debido a su nexo con la reclusión, pero permanecen intactos en su núcleo esencial*” Sentencia T-065 de 1995.

La crisis del sistema carcelario colombiano es un hecho notorio, su declaratoria históricamente se remonta al año 1998, cuando así lo definió el máximo Tribunal de lo Constitucional, en sentencia T-153 de 1998 con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz;

La existencia notoria de un estado de cosas inconstitucional en el sistema penitenciario. Con todo, las prescripciones de los Códigos, Penal, de Procedimiento Penal y Penitenciario y Carcelario, de los tratados y acuerdos internacionales citados y la misma jurisprudencia de la Corte acerca de los derechos de los reclusos constituyen letra muerta. Las condiciones de vida en los penales colombianos vulneran evidentemente la dignidad de los penados y amenazan otros de sus derechos, tales como la vida y la integridad personal, su derecho a la familia, etc. Nadie se atrevería a decir que los establecimientos de reclusión cumplen con la labor de resocialización que se les ha encomendado. Por lo contrario, la situación descrita anteriormente tiende más bien a confirmar el lugar común acerca de que las cárceles son escuelas del crimen, generadoras de ocio, violencia y corrupción.

Lo transcrito evidencia la distancia existente entre la función de la pena, y la realidad del sistema carcelario en el país, que se ha agudizado con el paso de los años, sin que se vislumbre una solución

EL DERECHO A LA REDENCIÓN DE LA PENA

de fondo por parte del Estado; así las cosas, no encontramos con que la sociedad se convierte cada vez más en juez de tipo ortodoxo y conservador, cuya función básica vendrá a ser la de imponer un castigo que no resocializa, porque no agrega valor al condenado. Categóricamente podemos afirmar que el fin del problema no acabará ampliando el número de reclusorios.

(Carrillo, 2019) Que el juez tiene la obligación de aplicar el Derecho no solo enfocado en la ley sino también en principios, ya que el juez es un líder social dentro de lo que se llama la humanización del proceso, no dejando esto aún lado ya que no puede perder este liderazgo el cual es esencial para la verdadera democracia siempre teniendo en cuenta sus providencias.

Kooyman (2018), experta en detención de la CICR¹, suministró cifras que evidencian la gravedad de la situación carcelaria en el país, señalando qué: *“115.792 personas privadas de libertad, (generan una) tasa de hacinamiento (que) supera el 365 % en algunos centros de detención...(que) la calidad de atención primaria y el acceso a servicios especializados de salud es deficiente, (y que) falta espacio de esparcimiento y resocialización”*. Por último, sostiene que *“la infraestructura es obsoleta por falta de mantenimiento”* (p.10). En el mismo sentido menciona que el registro de seguimiento histórico que hace la CICR, desde 1969, evidencia un crecimiento negativo para Colombia en cuanto a esta problemática, ligada a la corrupción, la violencia sistemática, el narcotráfico, el sicariato, la delincuencia organizada, entre otros factores que han doblegado al Estado colombiano.

Así pues, hablar de esta problemática no es asunto nuevo, en la misma Sentencia T-153 de 1998, la Corte enciende las alarmas sobre el sistema penitenciario y carcelario, que para esa anualidad arrojaba cifras del hacinamiento ascendían al 31,1%.

¹ Comité Internacional de la Cruz Roja.

EL DERECHO A LA REDENCIÓN DE LA PENA

Siguiendo esta línea la Corte Constitucional en Sentencia T-388/13 advierte que en las cárceles colombianas:

(i) los derechos constitucionales de las personas privadas de la libertad son violados de manera masiva y generalizada; (ii) las obligaciones de respeto, protección y garantía de los derechos de las personas privadas de la libertad han sido incumplidas de forma prolongada; (iii) el Sistema penitenciario y carcelario ha institucionalizado prácticas inconstitucionales; (iv) las autoridades encargadas no han adoptado las medidas legislativas, administrativas o presupuestales necesarias para evitar efectivamente la vulneración de los derechos; (v) las soluciones a los problemas constatados en el Sistema penitenciario y carcelario, comprometen la intervención de varias entidades, requiere un conjunto complejo y coordinado de acciones y exige un nivel de recursos que demanda un esfuerzo presupuestal adicional importante; y, por último, (vi) si todas las personas privadas de la libertad acudieran a la acción de tutela, se produciría una congestión judicial mayor de la que ya existe actualmente. Dado estos aspectos, concluye la Sala que sí se verifica un estado de cosas contrario a la Constitución de 1991. Es una situación que se ha consolidado poco a poco, sin sobresaltos, sin sorpresas; una situación que afecta de forma principal a la dignidad humana. Constatar un estado de cosas tan contrario al orden constitucional vigente es grave, en especial si se tiene en cuenta que el goce efectivo de los derechos fundamentales en prisión es un indicador de la importancia real que la dignidad humana para una sociedad.

No cabe duda, que la problemática carcelaria ha crecido en espiral en los últimos años, sin que se hubiere proveído una política pública asertiva que posibilite la reforma estructural necesaria para

EL DERECHO A LA REDENCIÓN DE LA PENA

establecer con los criterios mínimos que permitan que la pena cumpla su función de redención y resocialización. En la mencionada Sentencia T-388 de 2013 la Corte indico que el hacinamiento no era el único problema que debía resolverse, significativamente hace énfasis en la política criminal del país es “reactiva, incoherente, ineficaz, volátil, desarticulada, sin intenciones de resocializar a los convictos” recalcando que de esa manera carece del necesario enfoque preventivo.

Por su parte, la sentencia T-762 de 2015, en sus puntos segundo y tercero afirma lo siguiente:

SEGUNDO: REITERAR la existencia de un estado de cosas contrario a la Constitución Política de 1991, en el Sistema Penitenciario y Carcelario del país, declarado mediante la sentencia T-388 de 2013.

TERCERO: DECLARAR que la Política Criminal colombiana ha sido reactiva, populista, poco reflexiva, volátil, incoherente y subordinada a la política de seguridad. Así mismo, que el manejo histórico de la Política Criminal en el país ha contribuido a perpetuar la violación masiva de los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad e impide, en la actualidad, lograr el fin resocializador de la pena.

La facultad legítima del Estado en cuanto a la imposición de la pena y la privación de la libertad, le imprime una responsabilidad, una obligación, la del respeto, protección y garantía de los derechos de las personas que se encuentran privadas de la libertad. La Corte en la plurimencionada Sentencia T-388 de 2013, hace una claridad que no permite asomo de duda,

el derecho constitucional de toda persona privada de la libertad a estar en condiciones respetuosas de un mínimo vital en dignidad, implica, por lo menos: una reclusión libre de hacinamiento; una infraestructura adecuada; el derecho a no estar

EL DERECHO A LA REDENCIÓN DE LA PENA

sometido a temperaturas extremas; el acceso a servicios públicos; a alimentación adecuada y suficiente; al derecho a la salud, a la integridad física y mental y a vivir en un ambiente salubre e higiénico; el derecho de toda persona a las visitas íntimas; el derecho a poder regresar a una sociedad en libertad y democracia; así como el derecho de acceso a la administración pública y a la administración de justicia.

Colombia se encuentra en mora de una reforma estructural e integral al sistema Carcelario y penitenciario; de establecer una política criminal que provea los elementos indispensables para la pena cumpla su función social de resocializar y redimir quienes por algunas circunstancias incurrieron en la comisión de hechos delictivos, una política pública que involucre sistemáticamente a funcionarios, sociedad civil, y condenados, en procura de superar el estado de cosas inconstitucionales que viene declarado de vieja data.

En síntesis en la presente investigación en principio se analizarán el derecho a la redención de la pena en Colombia y el impacto de la resocialización de los privados de la libertad en Colombia; para luego realizar una aproximación a la situación actual del sistema carcelario y penitenciario, a la luz de la ley y la jurisprudencia, relevando la connotación de estados de cosas inconstitucionales que desde 1998 fue declarado por la Corte Constitucional, contrastándolo con la función social de la pena que busca la redención y resocialización del condenado, demostrando que existe una distancia entre estos principios y la realidad de las cárceles en el país, para finalmente concluir una crítica frente a la vigencia de derechos de redención de pena y resocialización en relación con las particularidades del sistema penitenciario y carcelario colombiano.

EL DERECHO A LA REDENCIÓN DE LA PENA

1.4 Delimitación de la investigación

1.4.1 Delimitación espacial

Para el presente trabajo se circunscribe exclusivamente al territorio colombiano.

1.4.2 Delimitación temporal

La investigación, se delimitará temporal en el periodo comprendido entre los años 1998 y 2019. La razón por la que se fija desde el año 1998 es porque desde este año, por causa de las problemáticas, que se comienzan a evidenciar en las cárceles, el máximo Tribunal Constitucional colombiano se pronuncia sobre estado de cosas inconstitucionales a través de la Sentencia T-153 de 1998. De modo que, la referenciada Sentencia insta a diversas instituciones, entre ellas al Inpec, ministerio de justicia y Congreso de la República, para que actúen por la superación de la vulneración de derechos reiterativos y sistemáticos.

Así pues, desde la Sentencia en mención se apertura toda una vigilancia y seguimiento para medir el avance en materia de infraestructura, calidad del agua potable, acceso digno y oportuno a la salud, acceso a una resocialización de calidad, entre otros derechos y garantías.

Por otro lado, el periodo de revisión llega hasta el 2019 para razones netamente de acceso a la información, pues con la generación de la pandemia en el año 2020 y extendida esta emergencia en lo que va del año 2021, se infirió que resultaría complicado acceder a información más reciente, por lo tanto hasta el 2019 se puede obtener todo un acervo documental oportuno para analizar cómo ha sido el avance del derecho de redención y resocialización, además de la superación a la que instó la Corte Constitucional desde el 1998 del estado de las cosas inconstitucionales en las instituciones carcelarias.

EL DERECHO A LA REDENCIÓN DE LA PENA

1.4.3 Delimitación científica

Paradigma cualitativo:

1.4.3.1 Paradigma de la investigación

La investigación se realizará utilizando el enfoque cualitativo, que se fundamenta primordialmente en la recolección y análisis de datos, sin la intervención numérica. La recopilación, selección y análisis de la información se realizará a partir documentos institucionales, libros, documentos electrónicos, páginas web, entre otros, por lo que la investigación es enteramente documental.

Investigación explicativa

A partir del análisis documental propuesto, esta investigación pretende una aproximación a las causas por las cuales la pena en Colombia no cumple su función social, en cuanto a la redención y resocialización del condenado; contrastándolo con los principios y valores sobre los que se estructura el Estado social de derecho, y con la realidad de las cárceles del país que se encuentra adecuadamente documentada, del, por tanto, la investigación planteada es explicativa.

1.4.3.3 Corte de la investigación

Bibliográfico documental

La investigación que se realizará es documental, porque los datos o información será acopiada desde libros, periódicos, revistas, informes institucionales, informes de ONG, páginas web, expedientes, entre otros que dan cuenta de la realidad y deficiencia del sistema carcelario en Colombia.

1.5 línea de investigación

EL DERECHO A LA REDENCIÓN DE LA PENA

Neurociencia cognitiva y salud mental

1.5.1 Sublinea.

Relaciones individuo –estado, democracia y ciudadanía

Capítulo II.

Marco teórico

2.1 Antecedentes de la investigación

Esta instancia es importante dado que concierne a las investigaciones previas, a fines al presente trabajo, que han llegado a conclusiones importantes en lo que tiene que ver con los derechos de los detenidos en prisión en Colombia. Como dinámica académica e investigativa es transcendental conocer que aportes han hecho los trabajos que se darán a conocer en el objeto de estudio tratado en este trabajo investigativo.

En ese sentido, Juan David Posada Segura en el año 2010 publica un artículo titulado “Derechos de los reclusos en los pronunciamientos judiciales”. Este trabajo hace parte de una investigación enfocada en la situación de los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad en relación a disertaciones realizadas por la Corte Constitucional de Colombia y Consejo de Estado. De modo que revisan que derechos se tornan suspendidos o limitados en el momento en que un ciudadano es recluso en una cárcel en Colombia; además de advertir sobre las responsabilidades que tiene la administración penitenciaria en asuntos de vulneración de derechos fundamentales frente a sus custodiados.

EL DERECHO A LA REDENCIÓN DE LA PENA

En la investigación se atisba que uno de los derechos más protegidos y, por el cual tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado se ha pronunciado es el derecho a la vida. Ambas corporaciones han insistido en que se debe garantizar este derecho a los reclusos sin ninguna categorización inferior en comparación al de un ciudadano que no ha ido a la cárcel. Es decir, el hecho de que una persona vaya a la prisión no le rebaja el derecho de vivir, pues su derecho a la vida es tan importante como el de cualquier ciudadano en Colombia. En ese sentido, ambos estamentos superiores de la justicia son garantistas del derecho de la vida en los presos.

Otro derecho por el cual se ha pronunciado la Corte Constitucional y el Consejo de Estado es sobre la libertad. Sin embargo, hay que decir que, la corporación contenciosa- administrativa sólo tiene tres (3) sentencias que específicamente han disertado sobre el derecho a la libertad. Por su parte, la Corte Constitucional tiene una producción más extensa sobre el mencionado derecho. Es decir, la Corte ha tratado el derecho a la libertad desde distintos enfoques. Aunque, se debe resaltar, dice el investigador, que ambas corporaciones coinciden en criterios como requisitos para recuperarla o acceder a ciertos beneficios relacionados con la libertad.

El derecho a la igualdad y prohibición de discriminación. La Corte frente a este derecho tiene mayor producción frente al Consejo de Estado. No obstante, en ambas corporaciones se nota la discriminación dentro de las cárceles de Colombia. Tanto así que, concluyen el estudio, que la misma ley (Ley 65), por su amplio espectro interpretativo, permite que funcionarios penitenciarios determinen ciertos grados de desigualdad y discriminación, cosa que va en contra de aspectos constitucionales. De modo que se atisban graves problemas al respecto de estos dos derechos.

Derecho a no ser sometido a torturas, tratos crueles, degradantes e inhumanos. El Consejo de Estado tiene menor pronunciamiento que la Corte Constitucional ante este derecho. Sin embargo, se concluye en la investigación que la corporación constitucional se ha enfocado más al tratamiento

EL DERECHO A LA REDENCIÓN DE LA PENA

humano que deben tener los reclusos. Y por su parte, el Consejo de Estado se alinea en que se eviten arbitrarios por parte de los funcionarios penitenciarios y, hasta de parte de los mismos reclusos.

Derecho a no ser sometido a esclavitud y servidumbre. En ambas entidades el pronunciamiento sobre este derecho es casi inexistente. Si bien es un derecho muy ligado a la libertad, por la falta de condiciones de infraestructura y altos niveles de hacinamiento los reclusos no reciben la mejor de las garantías. Como tampoco un trabajo digno para redimir la condena. En este estadio, Colombia debe mejorar mucho para comenzar a disminuir esta vulneración hasta eliminarla de un todo.

Derecho a no sufrir detención, prisión o destierro arbitrario. Este es otro derecho con poca producción en ambas Altas Cortes. Es un derecho que se vulnera en alto rango en las cárceles del país, por los problemas administrativos que se presentan recurrentemente. Tanto así que existen muchos casos donde la persona se le detiene un poco más de lo debido por atrasos en trámites. Tal situación también es alarmante en Colombia.

Derecho a la libertad de pensamiento, conciencia, expresión y opinión. En ambas corporaciones se limita su ejercicio por razones fundadas en la seguridad. En ese sentido, es limitada la ejecución de este derecho por parte de los reclusos.

Libertad de religión. Este derecho es uno de los más respetado presumiblemente, por decirlo así, en los centros de reclusión. Por tanto, las Altas Cortes en referencia es escaso su pronunciamiento.

EL DERECHO A LA REDENCIÓN DE LA PENA

Derecho a la libertad de reunión y asociación pacífica. Muy reconocido y garantizados por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Así los reclusos, con condicionamientos, lo ejercen por medio de comités, y cualquier tiene acceso a estos grupos sin restricciones.

Derecho a elegir y hacer elegido. El Consejo de Estado no ha desarrollado este derecho, sin embargo, la Corte Constitucional lo ha hecho de manera muy esporádica diciendo que es fundamental estar en ejercicio pleno de la ciudadanía para poder ejercerla. Por ello, quien no ha sido condenado puede hacerlo, aun cuando esté en medio de un proceso por eso de la presunción de inocencia, sin embargo, al estar condenado, ello trae implícito la restricción del votar o ser votado en elecciones en el país.

Derecho al trabajo, al descanso y al igual salario. El derecho al trabajo a dicho la Corte Constitucional tiene especial transcendía en el espacio carcelario, ya que está unido al trato dignificante del reo, además de ser un acto de superación humana lo cual se vincula con el núcleo fundamental del derecho de libertad, y de reducir la durabilidad de la pena por medio de la redención, y así mismo, el propósito de la resocialización.

En lo que concierne, a igual salario y descanso, en ambas Cortes, falta desarrollo en esta materia, por ello de algún modo hay desconocimiento del derecho internacional al respecto. Aspecto que el Estado colombiano, a través de la justicia, está moroso en garantizar.

Derecho a la salud y al bienestar. Ambas entidades defienden que el derecho de la salud no se puede ver limitado por el hecho de estar privado de la libertad. Es decir, todo recluso tiene derecho al acceso a la salud como derecho fundamental que es. Por ello, los administradores penitenciarios no deben impedir la prestación de servicios de salud a ningún preso en Colombia, pues no hay ni una diferenciación en su alcance y contenido en cuanto a servicio sanitario de trata.

EL DERECHO A LA REDENCIÓN DE LA PENA

Derecho a la seguridad social. Relacionado a lo anterior, el gobierno y el legislador, dice la Corte Constitucional, tienen el deber de regular el acceso espacial a la seguridad social a la salud por parte de los reclusos, y así tengan garantía permanente y oportuna a la salud. Por su parte el Consejo de Estado, concluye el investigador, no se había pronunciado sobre este tema.

Derecho a la alimentación. La Corte Constitucional ha tenido mayor desarrollo en esta parte, respecto a la dignidad y cuidado en los alimentos suministrados a los reos. Sin embargo, el Consejo de Estado, sólo se ha limitado a dar claridad en la manera como se debe interpretar la norma.

Derecho a la educación, las artes y la cultura. La educación es un derecho ligado con relevante importancia con la libertad, ya que, con por medio de la enseñanza – aprendizaje se puede disminuir la duración de la condena. En ese sentido, la redención de la pena se hace preponderante en este estadio. Al respecto la Corte Constitucional ha dicho que es un derecho que se torna limitado por razones de la restricción de la pena privativa, lo cual no siempre se puede ejercer de manera plena. Y cuando a la otra corporación, no se ha dado un pronunciamiento claro sobre el ejercicio de este derecho en las cárceles.

En lo que tiene que ver con las artes y la cultura, la Corte se ha pronunciado dos veces solamente sin ningún impacto relevante, pues sólo se limita a hablar del derecho sin ningún desarrollo práctico. Y por su parte el Consejo de Estado hasta el 2009 no ha dado su pronunciamiento.

Derecho a la presunción de inocencia. La corporación constitucional ha desarrollado ampliamente este derecho, ilustrando que la privación es una medida preventiva que restringe la libertad sólo para efectos investigativos, y busca se asegure al ciudadano que cometió el ilícito por un indicio fuerte y grave de que sea el responsable. De modo que, no habrá sanción sin antes haber comprobación. Por su parte, hasta el 2010 el Consejo de Estado no ha desarrollado este derecho.

EL DERECHO A LA REDENCIÓN DE LA PENA

Finalmente, el investigador Posada Segura (2010) concluye que la Corte Constitucional, principalmente, ha sido la entidad que más se ha pronunciado sobre los derechos fundamentales de los reos en Colombia. Y que esta entidad, siempre ha insistido en establecer que los derechos fundamentales en los sometidos a prisión en el país, debe garantizarse su ejercicio. Sin embargo, la misma Corte, es consciente del estado inconstitucional en el escenario carcelario, y que a pesar de que dio un plazo de 4 años para que se superara las problemáticas, éstas en gran medida siguen persistiendo.

(Portela, 2020) en su artículo El Derecho en tiempos de crisis manifiesta: *“las funciones negativas del Derecho, es una de las causas de nuestra crisis en la funcionabilidad evidente del sistema penal y carcelario”*. (p.10).

Los derechos deben ser no solo subjetivos sino estar presentes en la vida de las personas, de nada les sirve a las personas privadas de la libertad sus Derechos inherentes si no se les brindan de manera idónea, la crisis en los centros penitenciarios se va agudizando con el tiempo dejando de lado la dignidad de estos y la falta de políticas públicas para que el Estado se haga cargo.

Por su parte, Maryam Victoria Pachón Castillo, en su trabajo de grado de pregrado realiza el trabajo de investigación titulado “Del Derecho Fundamental a la Intimidad en Establecimientos Carcelarios: Un Estudio Jurisprudencial Constitucional sobre la Violación a este derecho, del año 2014 en la Universidad Católica de Colombia. El foco de la investigación estuvo radicado en revisar que tanto impacto negativo ha tenido el derecho a la intimidad en los ciudadanos privados de la libertad en la nación colombiana. De modo que hace una lectura importante de distintos pronunciamientos de la Corte Constitucional.

EL DERECHO A LA REDENCIÓN DE LA PENA

En este estudio mirar el tratamiento de derecho a la intimidad de tipo sexual, es decir, el derecho a tener relaciones sexuales con la pareja la persona reclusa en condiciones dignas y buen espacio, así mismo, se exponen aspectos de tener acceso a material pornográfico siempre y cuando esto no menoscabe el derecho de los demás reclusos. De tal manera, la corporación custodia de la Constitución, establece la importancia de proteger el derecho de la intimidad en todas las dimensiones.

No obstante, el estudio concluye que en la realidad de las penitenciarías la protección y garantía de este derecho se ve lesionado en parte, por los problemas de hacinamiento y mala adecuación de la infraestructura. Además, se vislumbra la falta de garantía de evitar violaciones en ocasiones de parte de reclusos a otros. De modo que la Corte advierte sobre la importancia de mejorar el cumplimiento de las garantías en el ejercicio de la intimidad en las cárceles colombianas, para mejorar la experiencia de los reclusos en este tema.

Por otro lado, se encuentra el trabajo, para optar el título de especialista en derecho procesal penal constitucional y justicia militar, titulado “La dignidad humana dentro de los centros carcelarios y penitenciarios de Colombia”, de la autoría de Juan David Gil Ruiz y Lyda Sofía Peralta Ovalle, publicado en el año 2015, en la Universidad Militar Nueva Granada. En su trabajo se centran en revisar el cumplimiento o materialización de la dignidad humana en las cárceles, desde distintas dimensiones como son la alimentación, espacio físico, trato digno, etc.

En lo principal anuncian los autores que los orígenes de la vulneración a la dignidad humana son factores como: el hacinamiento, la escasa infraestructura existente, las mínimas oportunidades de ocupación, la estigmatización social, la situación psicológica y emocional del reo y las mafias descontroladas al interior de las cárceles. Todos estos elementos hacen casi imposible un ejercicio de la dignidad en la vida cotidiana de los presos en Colombia.

EL DERECHO A LA REDENCIÓN DE LA PENA

Como alternativas para salir del hacinamiento, por ejemplo, se acogen algunas enunciadas por estamentos internacionales como: multas, es decir, el pago del infractor de la ley penal en beneficio de la víctima siempre y cuando lo realizado no sea grave; trabajo social comunitario, en este se busca un reflejo, que, por parte del delincuente, beneficie a la sociedad de manera real y verificada; prisión domiciliaria, esta sería para aquellas conductas que no sean gravosas o de menor gravedad. Todas estas medidas alternativas serían viables para evitar el hacinamiento, pero para su aplicación necesitaría un ejercicio ético y libre de corrupción por parte del administrador de justicia penal y el carcelario.

Como conclusión arguyen que la dignidad humana en las cárceles de Colombia falta ratificarla de manera urgente, pues no se dan bajos los lineamientos conceptuales que la Corte Constitucional ha establecido para su protección y consolidación en la vida de los reos. Así mismo, expresan que hay un estado de miseria en las cárceles, y que no todos los presos viven en las mismas condiciones, lo cual está supeditado al dinero que tienen u ofrecen algunos presidiarios. El estado de corrupción, falta de compromiso de funcionarios y la carencia de control por las autoridades competentes ayuda a que no se garantice de manera concreta el derecho a la dignidad humana en los centros penitenciarios.

Cote Villamizar y Leonel Darío Peña trabajaron la tesis de grado en la Universidad Libre de Colombia seccional Cúcuta, titulada “Acciones jurídicas aplicables para disminuir el hacinamiento de internos en el centro penitenciario de mediana seguridad de Cúcuta” en el año 2016. El objetivo marco de esta investigación estuvo perfilado en análisis de las acciones jurídicas que se podrían aplicar para reducir el hacinamiento en el Centro Penitenciario de Mediana Seguridad en Cúcuta.

La investigación da cuenta de algunos problemas en el tema de saneamiento básico en la cárcel, pues los reos no cuentan con privacidad en las duchas, además de no contar con agua en ocasiones

EL DERECHO A LA REDENCIÓN DE LA PENA

en los baños. Así mismo, hace falta adecuados lavaderos de ropa. Tal situación pone en evidencia los problemas en aspectos del aseo y saneamiento colectivo en esta prisión del país.

Por otro lado, se evidenció tratos crueles y maltrato a algunos internos. Lo cual contradice los derechos fundamentales establecidos en la Constitución colombiana. Los reos son sometidos a torturas cuando incurren a comportamientos inadecuados o de indisciplina, pero nada de ello justifica los abusos físicos y golpes hacia esta población, enfatizan los autores.

La sobrepoblación es otro problema grave en la cárcel de Mediana Seguridad de Cúcuta. Esta circunstancia dificulta que se realicen programas de resocialización que impacten de manera general a la población carcelaria, pues no todos pueden participar. Por otro lado, la aglomeración en dormitorios, patios y otros espacios que no brindan un adecuado ambiente desde el punto de vista visual, convivencial y de locomoción interna. Es decir, todo el apilamiento imposibilita la calidad de disfrutar de un espacio sano y de calidad.

En fin, Cote Villamizar y Leonel Darío Peña (2016) insisten en recordar lo que la Corte Constitucional ya ha propuesto, y es que con urgencia se deben hacer en las cárceles colombianas reformas profundas para que comience a disminuir el hacinamiento, y junto con ello, la afectación a los derechos fundamentales de los reclusos, pues la Constitución enfatiza que todos somos iguales ante la ley, y le deben ser respetado sus derechos. (p.58).

La investigación “Las cárceles como espacios de violación a los derechos humanos, estudio de caso: cárcel modelo de Bogotá 2002-2010”, de la autoría de Juan Manuel Carreño Martínez para optar el título de politólogo en la Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, año 2016, tuvo como objetivo principal analizar la situación de vulneración de los derechos humanos en la cárcel Modelo de Bogotá.

EL DERECHO A LA REDENCIÓN DE LA PENA

En este trabajo investigativo se enfatiza en que Colombia vulnera los derechos humanos de reclusas y reclusos a diario en la cárcel modelo, pues se evidencian tratos no dignos a los presos. Y más aún esa vulneración la sufren las mujeres internadas en las prisiones como agente vulnerable.

En la cárcel Modelo de Bogotá bajo la política de Seguridad Democrática del gobierno de Álvaro Uribe, hubo un aumento de los tratos degradantes, crueles e inhumanos. Se aplicó lo que se podría llamar el tratamiento penitenciario del miedo y “la eliminación del reo como ser humano” es decir, solo se le miraba como un objeto. Tanto así que sólo tenían agua potable 2 horas al día, lo que los sometían a extensas horas de sed (Carreño Martínez 2016, p.37)

Bajo las políticas penitenciarias del 2002 y 2010 se reflejó, en cárceles como la Modelo, ausencias de programas de resocialización claros, además hubo un marcado discurso punitivo en donde muchas medidas se resolvían con castigos crueles y tratos inhumanos. El recluso de mira como enemigo interno, y no como un ser humano a mejorar para su reinserción a la sociedad como persona útil. Bajo esta óptica, los derechos humanos no tienen un impacto positivo vinculante en beneficio de los reclusos (Ibídem, p38).

En suma, concluye el investigador que la política criminal en Colombia tiene un rasero netamente punitivo, y que no brinda las oportunidades para una resocialización efectiva y eficiente. Además de ello, se violan los derechos humanos permitiendo situaciones inconstitucionales como el hacinamiento, tratos crueles y falta de garantías en el acceso a la salud. Para el mejoramiento de todo este panorama negativo es necesario voluntad política de distintos sectores relacionados con el sistema carcelario (Ibídem, p 39).

En el año 2016, Mayra Alejandra Carrillo Bohórquez publica su trabajo de tesis titulado “El derecho a la redención de la pena en el Sistema Penal colombiano” con la Universidad Católica de

EL DERECHO A LA REDENCIÓN DE LA PENA

Colombia. Esta investigación se orienta en analizar el derecho de redención en el sistema penal colombiano, de modo que hace una revisión conceptual de la pena en relación con la redención como un beneficio para el recluso por efecto de sus estudios o actividades productivas.

Apunta la investigación que la resocialización es un instrumento del orden jurídico que está sentado en la Constitución Política de 1991. Por lo tanto, el recluso no sólo puede vérselo como un agente que el Estado debe castigar sin clemencia sino, tratar de que se reinsera como una persona útil para la sociedad y su familia. Es por ello que se debe evitar los tratos inhumanos y degradantes hacia la población reclusa (Carrillo Bohórquez, 2016, p.12).

En armonía con lo anterior, la redención de la pena toma un lugar importante en la vida penitenciaria, puesto que, esta como derecho, no se puede ver solo como trámite administrativo, sino como un derecho merecido por el reo que cumple con los criterios para que le sea reconocida por el Estado. Ahora, tal beneficio tiene sus limitantes de acorde a ciertos delitos que la ley excluye por su gravedad. (Ibíd, p18).

De modo que no se pueden por parte del Estado colombiano expedir normas que pongan límites injustificados a la redención. Asimismo, se deben evitar interpretaciones por parte del aparato judicial que no permita el disfrute de este mecanismo que hace viable la reintegración del ser humano cuando ha cometido un delito, y la idea es que sea corregido y recuperado para beneficio de la familia, la sociedad y de sí mismo. No debe ser la venganza el fin último del sistema carcelario en Colombia (Ibíd, p.29).

Luis Alfonso Fajardo Sánchez en su artículo titulado “Derechos Humanos de las personas privadas de la libertad en Colombia”, en la Revista Republicana en el año 2018, realiza un estudio en 6 ciudades del país sobre las técnicas penitenciarias con enfoque de Derechos Humanos. Las

EL DERECHO A LA REDENCIÓN DE LA PENA

ciudades son Pereira, Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga, Cali y Medellín. Funcionarios de Inpec que tuvieron participación en su totalidad fueron 170. El propósito principal es verificar que tan evidente es la garantía de los derechos humanos en el escenario carcelario de Colombia a la luz de la jurisprudencia de la Corte Constitucional.

El investigador apunta en primera línea que el hecho de que la Corte Constitucional desarrolle jurisprudencia que exhorte a que no siga el estado de cosas inconstitucionales, demuestra que el Estado Social de Derecho en Colombia ha fallado groseramente en la garantía de los derechos en los reclusos, por ello es constante y reiterada la vulneración de derechos mínimos que se le debe ofrecer a todo ciudadano, independientemente de que sea un ciudadano restringido de su libertad por algún delito.

Una grave conducta evidenciada y atentatoria a la dignidad humana de algunos carcelarios es el hecho de los aislamientos forzados a los que son sometidos sin clemencia. Pues se han visto comportamientos de parte de funcionarios que castigan a reos con problemas de convivencia y psiquiátricos a prolongadas horas de encierro con calor extremo, tratos indiscriminados y uso de la fuerza desproporcionada (Fajardo Sánchez, 2018, p.132).

Otro acto que se suma a la consecución de lastimar a los derechos humanos de los reclusos es que las investigaciones disciplinarias quedan sin su desarrollo debido. Se evidenciaron hechos en los cuales funcionarios denunciaron a otros por lo ilegal de sus actuaciones en el tratamiento de la disciplina con los internos, y tales denuncias nunca se les da los trámites respectivos por los altos mandos, lo cual no deriva en sanciones y, en ocasiones ni siquiera, en llamados de atención (ibídem, p.135).

EL DERECHO A LA REDENCIÓN DE LA PENA

El autor concluye entonces que, son pocos los avances que en Colombia en materia de las garantías de los derechos humanos a los privados de la libertad. Y afirma que la crisis carcelaria es “endémica”, lo cual se agrava día a día. Y se espera que con la Comisión de seguimiento creada en el 2015 por parte de la sentencia T-388 del 2013, la ciudadanía y los expertos en la materia, como universidades y organizaciones sociales, coadyuve a la solución definitiva de esta problemática a la vulneración de los derechos humanos a la población carcelaria.

Finalmente se trae a colación el estudio de Carlos Hernán Pardo González, titulado “Políticas públicas y derechos humanos en las cárceles colombianas” publicado por medio de la Universidad Católica de Colombia para el año 2018. La problemática generadora que pretende responder el trabajo es si las políticas públicas expedidas en la nación colombiana han contribuido en reducir el estado de las cosas inconstitucionales declarado por la Corte Constitucional.

Al respecto el investigador apunta que las políticas públicas tienen buenas intenciones a que la protección a los derechos humanos se extienda no sólo a los reclusos, si no que de algún modo se involucre a su familia desde el enfoque de la protección a la dignidad humana.

Sin embargo, esto no se ha evidenciado de manera contundente, aunque no hay que negar las mejoras en algunas cárceles del país. Pero, aún persisten problemas como el hacinamiento, alimentación de poca calidad, riesgos en enfermedades y baja calidad en los servicios de salud. Un punto interesante es que la población masculina sufre en mayor medida estas restricciones de derechos en las cárceles (Pardo González, 2018, p.30).

(Llanos, 2018) en su artículo de investigación, nos indica que las investigaciones de Derecho de nuestros días deben enfocarse en la misma sociedad, si por el contrario esta se aísla de lo realmente importante no se podrá realizar la regulación en el concepto sociológico de Derecho, del

EL DERECHO A LA REDENCIÓN DE LA PENA

cual se podría indicar que es lo que realmente ocurre en la sociedad y saber las falencias estructurales a nivel de educación por lo cual muchos de las personas privadas de la libertad vuelven a reincidir después de ser liberadas , el estudio sociológico del Derecho nos abrirá camino a que los legisladores construyan las normas con validación social, siendo el Derecho más palpable en la realidad.

En énfasis, los servicios que más les urge a los presos es que se les brinde es educación, trabajo, buena alimentación, apoyo psicológico tanto a ellos como a su familia y mayor calidad en la infraestructura. De esta manera, se evidencia en algunos reos, el estado consciencia de su necesidad dentro de los centros de reclusión. Por ello, es imperioso que el Estado colombiano trabaje de manera comprometida en mejorar los problemas indicados por la Corte Constitucional (ibídem, p.31).

2.2. Bases teóricas

En esta instancia se dará una base teórica propicia al objeto de análisis del presente trabajo. En ese sentido se dará cabida a aspectos como los derechos fundamentales, los derechos humanos, los derechos fundamentales de los reclusos, el Estado social de derecho y todo lo afín al tema.

En ese sentido, se debe comenzar diciendo que el vocablo derecho es complejo y amplio, y este tendrá su mejor entendimiento desde el contexto en que se le ubique y el enfoque en que se quiera aplicar. De esta manera, se puede decir que los derechos son entes subjetivos que permiten que los seres humanos gocen de prerrogativas a lo largo de su existencia que están en relación con el buen vivir, la existencia digna y la realización de eso que llamamos proyecto de vida. En palabras más especializadas se puede remitir a Bernal Pulido, quien expone que los derechos toman un carácter de fundamental cuando se les da se les da esa connotación desde un marco jurídico constitucional

EL DERECHO A LA REDENCIÓN DE LA PENA

(2015, p.1572). De esta manera, se debe entender que los derechos son una construcción social, y se les da una categorización jerárquica desde consensos políticos que se reflejan en documentos fundamentales como las constituciones.

Los derechos es la construcción de una insatisfacción, luchas y entusiasmo por formas de vida dignas para el ser humano. Es así como “deberes y derechos son conceptos históricos” (Paces Barca, s/f, p.7). De tal manera que los derechos son de ámbito individual y colectivo, su dimensión se centra en lo específico de su ejercicio. Por ejemplo, el derecho a elegir y ser elegido es un derecho que se puede ejercer desde lo individual, pero, a su vez, tiene un aforo colectivo porque se benefician ciudadanos y Estado (ibídem, p.8).

Los derechos es el reconocimiento mutuo que se origina por el conjunto de la comunidad. Es decir, se genera los pactos necesarios para que se respeten conceptos racionales como la dignidad humana, la igualdad, el trato digno, etc. Y es ese acuerdo, medido por lo racional, lo que le da el carácter de lo fundamental: “por el acuerdo entre los ciudadanos” (ibídem, p. 9).

Por ello, los derechos y sobre todo los derechos fundamentales no se agotan en su enunciación en la Constitución escrita, sino en la dimensión material de su realización que genere un impacto directo al ciudadano. Por ello, la comprensión de que es necesario y suficiente con que los derechos fundamentales sean enmarcados en la constitución con un rotulo distintivo no es una tesis fuerte para asegurar que fuera de ella, no se le podría considerar fundamental a un derecho.

Para dar unos contraargumentos a la tesis de que los derechos fundamentales se agotan en su enunciación necesaria en la Constitución, se trae a colación a Bernal Pulido que expresa:

EL DERECHO A LA REDENCIÓN DE LA PENA

Es bien cierto que esta comprensión enfatiza la naturaleza particular del carácter fundamental de los derechos fundamentales. Sin embargo, no puede dar cuenta de su naturaleza universal. En segundo lugar, siempre tiene sentido indagar si la Constitución es incompleta porque todavía no están incluidos ciertos derechos fundamentales. Y tercero, esta interpretación no puede aclarar por qué muchos países se ha aceptado que existen disposiciones que no están incluidas en sus constituciones, pero se establecen como derechos fundamentales (Bernal Pulido, 2015, p.1578).

Los derechos fundamentales serían esas facultades subjetivas a las que tiene acceso todo ser humano sólo por el hecho de serlo, y que tanto en lo individual como en lo colectivo se expresan. Por lo tanto, el Estado debe dar garantías a su realización sin limitaciones, salvo las que establezca la ley con justificaciones fundadas. Y esos derechos fundamentales no son sólo esenciales por el hecho de estar enunciados literalmente en una Constitución, sino que estos ganan su connotación por medio de la experiencia social, política y cultural de una nación. En otras palabras, un derecho es fundamental desde la relevancia que tiene en la vida de los seres humano, que de impedirle atenta contra su ser intrínseco obstruyendo realizaciones de vida ligadas a la felicidad y la dignidad. Por tanto, los derechos fundamentales concentran “una moralidad y una juridicidad” esencial para su existencia (López Melero, 2015, pp.158-159).

Ferrajoli trae algunas nociones de derechos fundamentales. La primera considera que los derechos fundamentales están anexados universalmente a los ciudadanos dándole la capacidad de obrar. La segunda noción tiene que ver con la universidad de derecho que están recogidos en cartas constitucionales o en Declaraciones universales como la de los derechos humanos. Y la tercera expresa que los derechos fundamentales deben entenderse desde la meta-ética y meta-política, y que se complementan en lo estatal e internacional. Por ello, en esta se entiende como fundamentales

EL DERECHO A LA REDENCIÓN DE LA PENA

derechos como la vida, la paz, la libertad, la igualdad, esenciales desde las distintas esferas de la existencia de un ser humano. Dentro de esta dinámica de comprensión de los derechos fundamentales se debe considerar las minorías, los más débiles de la sociedad, entre otras consideraciones que hacen que tenga sentido la existencia de lo fundamental de un derecho (2006, pp-117-118).

Esta dinámica de entender los derechos fundamentales hasta aquí es esencial, porque estos se alimentan de los derechos humanos como ya se ha podido notar. En ese sentido, es también importante repasar aspectos teóricos de los derechos humanos.

Estos se consideran esenciales en el ser humano, y que son inherentes al mismo por el solo hecho de ser, bajo criterios como la dignidad, la libertad, la igualdad, etc. Por tanto, deben ser garantizados por el Estado de manera coactiva en el momento en que se originen infracciones a tales derechos importantes. Por otro lado, se complementa la idea de los derechos humanos como derechos morales reconocidos y garantizados por la sociedad que trasciende a lo cultural, lo económico, político, ambiental, convivencial, entre otras dimensiones vitales. La protección de estos derechos se cubre desde lo internacional a lo nacional y viceversa (Sagastume Gemmell, 1991, p.12).

La Organización de las Naciones Unidas (O.N.U.) asume a los DD.HH. como:

Inherentes a todas las personas. Definen las relaciones entre los individuos y las estructuras de poder, especialmente el Estado. Delimitan el poder del Estado y, al mismo tiempo, exigen que el Estado adopte medidas positivas que garanticen condiciones en las que todas las personas puedan disfrutar de sus derechos humanos. [...] y han sido establecidos en constituciones nacionales y el derecho internacional. (2016, pp. 18-19).

EL DERECHO A LA REDENCIÓN DE LA PENA

El pasaje anterior da entender que los derechos humanos han ganado una dimensión general en la humanidad porque surge de la idea de que son inherente al humano, por tanto, no hay una distinción de razas, nacionalidad, religión u otra connotación para merecer ejercerlo, sólo basta con que se sea humano. Esta idea filosófico-política y moral permite que sea acogida desde la universalidad. Pero tal hecho, no ha impedido que aun existan sociedades en los que se vulneran y, en el peor de los casos, se desconocen indiscriminadamente por el Estado, sobre todo cuando está en la administración del poder estatal gobiernos autoritarios y abusivos.

Derechos humanos esenciales en la vida de los ciudadanos sea cual sea situación en sus países son: el derecho de las personas detenidas a ser tratadas humanamente, el derecho a la vida, la prohibición de las leyes penales retroactivas, el derecho a trabajar, el derecho a la seguridad social, el derecho a no sufrir torturas ni tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, el derecho a no ser sometido a esclavitud, servidumbre o trabajos forzosos, el derecho a la libertad y la seguridad de la persona, el derecho a un juicio imparcial, el derecho a la vida privada y la libertad de pensamiento, conciencia y religión, entre otros (Ibídem, p 21.)

Es esperarse entonces que un Estado Social de Derecho como garante de derechos sociales fundamentales para la supervivencia digna de sus administrados, cobije a los DD.HH. en todas sus dimensiones día tras día a pesar de las complejidades de la vida comunitaria, pues su esencia es la realización y ejercicios de derechos en la población de forma real y material, y no un mero discurso político y moral (Villar Borda, 2016, p.83)

Es el Estado Social de Derecho el garante nacional que los derechos humanos sean evidenciados por sus ciudadanos sean estos jóvenes, ancianos, empresarios, presos, interdictos, artistas, profesionales, amas de casa, jornaleros, etc. Todo ciudadano debe experimentar su ejercicio salvo

EL DERECHO A LA REDENCIÓN DE LA PENA

con las limitaciones esenciales de la ley, que nunca atentan directamente con la vida, la honra y la dignidad humana.

Ahora bien, los reclusos de un país no se les pueden limitar indiscriminadamente de los derechos humanos y, por ende, ni de sus derechos fundamentales. Lo que da a entender sin equívocos que los ciudadanos privados de la libertad siguen cobijados a derechos fundamentales aun cuando hayan incurridos en delitos de cualquier índole. De aquí la máxima constitucional de que todos somos iguales frente a la ley.

De modo que los reclusos siguen con la facultad de ejercer derechos a la salud, a la información, a la no discriminación, al trato digno, a la no tortura y tratos degradantes, derecho a la vida, a la seguridad social, entre otros esenciales dentro del centro penitenciario. Es decir, los derechos siguen valiendo tanto para ellos, como deben valer los esfuerzos del Estado por garantizarlos (Sancha Díez, 2017, p.207).

Los presos tienen derecho a ejercitar sus derechos civiles como contraer matrimonio u otros, que no sean incompatibles con limitaciones propias para la seguridad de la sociedad o de sus víctimas. Asimismo, los derechos como ingreso a servicios de salud son esenciales para su dignidad y protección. Por tanto, ningún Estado serio puede limitar derechos a sus reos de manera caprichosa (López Melero, 2015, p.71).

Hay que tener claro, que una persona privada de la libertad, se les limitan de derechos como la libre locomoción, libertad, entre otros derivados a consecuencia de haber cometido una infracción a la ley. Sin embargo, hay derechos que se deben seguir garantizando como son la salud, la dignidad humana, el libre desarrollo de la personalidad, la intimidad, etc., que no son incompatibles con su condición de reos (Posada Segura y Guardia López, 2021, p 326).

En sintonía con lo anterior, el Estado debe ser garante constante del acceso a derechos propios a la dignidad humana de los presos. No puede suspenderse el goce de ciertos derechos de forma

EL DERECHO A LA REDENCIÓN DE LA PENA

indiscriminada, y menos aquellos derechos que están ligados a mantener la vida, el bienestar y el buen vivir de los ciudadanos, y a los privados de la libertad también se les debe ofrecer. En ese sentido es importante saber que:

Las personas privadas de la libertad se encuentran bajo guardia y custodia del Estado Social de Derecho. Tal relación implica, por una parte, responsabilidades relativas a su seguridad y a su conminación en el perímetro carcelario, y, por otro lado, obligaciones en relación a las condiciones materiales de existencia e internamiento. La jurisprudencia nacional constitucional ha señalado que la relación de especial sujeción en que se encuentran las personas privadas de la libertad respecto al Estado, conlleva al deber de respetar y garantizar el principio de eficacia de los derechos fundamentales (Corte Constitucional, 2018, p.10).

Todos los derechos son importantes para en el escenario carcelario, aunque, como ya se dijo, algunos se limitan por condiciones propias de la reclusión. Aunque, derechos que toman especial relevancia son el derecho a recibir tratos respetuosos, no ser sometido a tratos crueles y degradantes. Por la condición de reos se puede entender por algunos funcionarios que pueden humillar, maltratar o hasta asesinar a los reclusos por ser personas condenadas. No obstante, tal conducta es reprochable desde todo punto de vista porque el “Estado debe abstenerse de cometer actos crueles e inhumanos” a sus reclusos, y, por el contrario, debe establecer medidas progresivas para materializar derechos que merecen gozar por el simple hecho de ser humanos. De tal manera, las personas reclusas tienen derecho a los derechos como ciudadanos que son (Grupo de prisiones, 2019, p.5).

En énfasis, los derechos fundamentales han tenido una construcción humana histórica desde los aspectos filosóficos, políticos, morales, económicos y culturales. Su connotación esencial es que

EL DERECHO A LA REDENCIÓN DE LA PENA

pueden ser ejercidos por cualquier ser humano solo por el hecho de serlo, lo cual no se suspende ni pueden ser obstruidos sin justas causas, y delimitados por la ley. Así mismo, los ciudadanos privados de la libertad pueden ejercerlos aun en medio de los centros de reclusión, por ello, el Estado debe garantizar a todo ciudadano de su país su goce y protección. En otras palabras, el estar recluso en una cárcel no excluye de tener capacidad de goce de los derechos humanos y derechos fundamentales en un Estado social de derecho.

2.3. Referente histórico

En este aparte se hará un recorrido sucinto, pero esencial, de los aspectos históricos de las cárceles, desde la concepción castigadora hasta la concepción humanizada. Esto es importante para tener una idea de la evolución de las garantías de los derechos de las personas privada de la libertad.

(Arrieta, 2020)

As the century of lights passed, faith in the social progress of humanity based on reason and knowledge was accentuated. The religious faith of former times, which promoted values of justice based on perpetual punishment, gave way to another type of faith. This faith was based on the human being's own capacity to educate himself in order to dissipate the obscurities of superstition, oppression and ignorance. About this new kind of faith, Kant made a brief dissertation in answering the question of what enlightenment is, about which he states that: Enlightenment is man's emergence from his self-imposed nonage. Nonage is the inability to use one's own understanding without another's guidance. This nonage is self-imposed if its cause lies not in lack of

EL DERECHO A LA REDENCIÓN DE LA PENA

understanding but in indecisión and lack of courage to use one's own mind without another's guidance. Dare to know! (Arrieta, 2020) (p.474)

Las llamadas casas de corrección tuvieron un reconocimiento dentro de la sociedad. Pues se consideraba que por medio de estas todo aquel ciudadano que incurriera en un acto reprochable por la ley, reclusos en ellas serían corregidos para ser útiles socialmente (Checa Rivera, 2017, p.9). Los primeros países donde se establecieron fueron: Inglaterra, Alemania, Holanda y Suiza. En Londres, por ejemplo, se abrió en 1552. Estas primeras casas correccionales se enfocaban en personas pobres que tenían capacidad para trabajar, pero se oponían, de modo que su objetivo era imponerles ese hábito. Tal experimento se fue replegando a varios países (Ibídem).

Hay que apuntar que, en estas primeras casas de corrección, caso Inglaterra y Holanda, llevaban prostitutas, vagabundos, mendigos y delincuentes menores. Su metodología principal era el trabajo; aunque también, establecieron una clasificación según la edad, sexo, gravedad de delitos. Antes de la creación de las casas de corrección, las cárceles sólo tenían el objetivo de asegurar y custodiar a las personas que cometían delito, hasta que se le estableciera un juicio y su sentencia. Pero, con ellas, se implementa el trabajo como obligatorio y necesario. Lo cobrado por los internos, les servía para pagar su propia manutención, y los excedentes se les permitían gastar en la misma institución (Ibídem, p.11).

En cuanto a la rehabilitación de los internos, se estableció una norma (código) que daba las condiciones para la cual era vigilada por los jueces. Se dividía en cuatro categorías, entre las cuales estaba la asignación a los internos de estar en lugares como hospitales, donde tenían ciertas funciones específicas de colaboración o ayuda (Ibídem, p.12).

EL DERECHO A LA REDENCIÓN DE LA PENA

En estos centros los reclusos eran vigilados y corregidos por los guardias. Además de ello, los guardias y administradores debían educar a sus internos, enseñándoles un oficio útil. Pero todo este sentido, social, se fue perdiendo por el deterioro de las actividades laborales, lo cual jugó en contra de los reclusos, y de tal forma se esfumó el sentido reformador de las casas de corrección (ibídem).

En fin, las distintas casas de corrección implementadas en Europa, se enfocaron en tener el trabajo como una actividad propicia para encaminar a los reos de su época. Tal objetivo siempre era que fueran útiles y productivos. Su método de reformar a los delincuentes era con imposición de disciplina, enseñanza de algún oficio y vigilancia estricta. No obstante, con el tiempo se fue debilitando esta idea. Aunque de algún modo, persiste en la actualidad en algunos países.

Por otro lado, autores conscientes de que la vida de un reo antes del siglo XVIII era más dura, es decir, era sometido a tratos inhumanos y ultrajantes, tanto así que se les sometía a la muerte muchas veces, consideran que la resocialización en el ámbito carcelario surge desde el siglo referenciado anteriormente, alcanzando su máximo en el siglo XIX, cuando se incluye el “proyecto de la transformación del individuo” relacionadas con los asuntos criminales y reformas desde la legislación (Zysman Quirós, 2010, p.1).

En complemento Zysman Quirós, citando a Rotman, expone que:

La resocialización puede ser representada por cuatro modelos sucesivos: el modelo penitenciario (que tendría por elementos básicos el trabajo, la disciplina y la educación moral), el terapéutico o médico (sobre el que gira la mayor parte del debate actual sobre la resocialización), el modelo de aprendizaje social, y una concepción de la resocialización orientado por los derechos de los presos. Por esta razón, afirma que términos como *reforma*, *regeneración*, y *corrección*, tanto como expresiones más modernas como *reentrada*, *reintegración social*, *reeducación* y *resocialización (rehabilitation)*, fueron usados para referirse a la misma idea (Ibídem, p.1-2)

EL DERECHO A LA REDENCIÓN DE LA PENA

De modo que, la resocialización de un preso o reo está vinculado al correccionismo penal de Europa y al de los Estados Unidos de América. Que buscan siempre curar o corregir al individuo que se ha desviado de las conductas loables y del respeto de la ley que se imparte en una sociedad civilizada y organizada, con estándares éticos y morales generalizados (ibídem).

En ese sentido, posterior a la posguerra, las ideas de castigo, venganza y tortura hacia los internados en prisión, se ha cambiado por un pensamiento más humanista, utilitarista y social en caminado a una resocialización a la vida ciudadana. Tal reto se persigue desde los estamentos internacionales pues, la concepción castigadora que por años rigió, sufrió arduas críticas que la hicieron perder terreno en el escenario mundial (Ibídem, p2.). Sin embargo, no hay que olvidar que la idea de la resocialización no impacta de la misma manera en todos los países, dadas las distintas circunstancias de voluntad política, económica y de sobrepoblación en los centros de reclusión.

En esta instancia, también vale la pena traer a colación el refugio de San Miguel fundado en Roma en 1704 y, en 1773 la casa de gante en Bélgica. Con estos dos organismos se realizó la transición entre el retribucionismo y correccionalismo.

En la época de la ilustración, pensadores como Voltaire, Montesquieu, Morelly y otros expresaron con ahínco su interés en que se ejecutaran reformas al ejercicio judicial penal, insistiendo en que se excluyeran delitos en relación a actos que infringieran hacia la religión; creando así criterios específicos para hacer que se estableciera una administración de justicia adecuada con vocación humana en la aplicación de los castigos entre los que se hallaban: la mutilación, los trabajos forzosos y escarnio público. Con el tiempo se deriva desde el positivismo, el surgimiento de una nueva forma penal, donde se centra la resocialización como un tratamiento el cual el único fin es la readaptación social de los condenados. (Hernández, 2012, p).

EL DERECHO A LA REDENCIÓN DE LA PENA

En complemento con lo anterior es importante reseñar lo que Hernández resume:

Dentro de las formas de pena privativa de la libertad se pueden citar a los regímenes filadélfico o pensilvánico, auburniano y el panóptico. El primero inició su funcionamiento de manera experimental en 1790 en Filadelfia, y 4 décadas más adelante se instituyó el primer establecimiento para ejecutarlo de manera exclusiva. Se caracterizaba por aislamiento permanente, la prohibición de trabajar, educación religiosa y silencio total.

El segundo fue en 1821, en Auburn, Nueva York, donde primeramente se dio aplicación al régimen pensilvano, implantándose un régimen cuyo principio rector era: “severa disciplina a través de castigos corporales”. Se entendía que los castigos eran eficaces, porque servían para intimidar a los reclusos, sin derivar en perjuicios a su salud. Aspectos característicos de esta metodología carcelaria fueron: aislamiento nocturno, trabajo en común, disciplina extrema y silencio absoluto.

El tercero, su creador fue la implementación de las prisiones en forma de panóptico. En ellos se buscaba asegurar a los presos con mayor eficacia, sin que se generara alto costo y derivar en una aplicación de reforma moral para incentivar a las buenas conductas y garantizar adecuada vida luego de la liberación. En esta metodología carcelaria es relevante la arquitectura y su régimen interno (p).

El escenario señalado por el autor, es muy distinto a la idea de resocialización que se imparte en los tiempos modernos, al menos desde el punto de vista filosófico y teórico. Pues hoy por hoy, las entidades internacionales como la ONU y ONG promulgan y, exhortan a distintos países en que se implemente una prisión humanizada, que ayude a la readaptación del ciudadano privado de su libertad, un ciudadano regenerado y servil a su familia y a su comunidad. Por ello, hoy el trabajo

EL DERECHO A LA REDENCIÓN DE LA PENA

digno, la educación plural y técnica, el aprendizaje constante y aportes significativos a la construcción de paz y productividad se tienen en cuenta para reducir penas en los centros carcelarios.

Debe quedar claro, como muchos autores coinciden, la resocialización está vinculada al mejoramiento de la persona, su comportamiento y su conducta social del reo al salir de la detención. Además, la educación es un pilar para alcanzar la reinserción exitosa. De modo que, se verán beneficiados las familias de los presos y la sociedad entera. Es por ello, que las posturas humanistas, que combaten la idea de regresivas de pleno castigo, deben ser defendidas desde la justicia y el legislativo, donde posibiliten espacio de cordialidad y respeto por los derechos humanos de los reclusos, como lo están haciendo las Cortes Constitucionales (Zysman Quirós, 2010, p.4).

En énfasis, el mundo carcelario, a través de la historia ha experimentado distintos momentos que lo han marcado desde la crueldad de tratos a los reos hasta la humanización del sistema con la aspiración de que se convierta en un escenario transformador de un buen ciudadano. En este sentido, se ha caminado por los estadios de la venganza, el trato cruel, el castigo inclemente, trabajos forzados; y a medida, que los Estados se han modernizado, por medio de revoluciones sociales y políticas, con ideas más humanistas, las cárceles transitan a trato digno del reo, a las garantías de derechos propios del ser humano por el simple hecho de serlo. Y como gran aspiración es convertir la cárcel contemporánea en un escenario reeducador para insertar a un nuevo ciudadano o ciudadana servil a la comunidad, al Estado, a la familia y para sí mismo.

EL DERECHO A LA REDENCIÓN DE LA PENA

2.4. Marco conceptual

Como se ha dicho anteriormente, la presente investigación tiene como objeto de estudio explicar la naturaleza y circunstancia de los derechos de los condenados a prisión en Colombia. Entendiendo que los derechos fundamentales no sólo son aplicables a los ciudadanos ejemplares, sino a todo ser humano, aunque haya incurrido en infracciones de ley. De modo que, este trabajo se alimenta de la construcción jurisprudencial que ha hecho la Corte Constitucional sobre la defensa de los derechos hacia los internos en las cárceles de Colombia; además de todo ese llamado a aplicar estrategias para que desaparezca el estado de cosas inconstitucionales en el país.

Es importante recordar que los privados de la libertad en Colombia, como en otras partes del mundo, tienen el derecho, y el Estado el deber, de brindársele oportunidad de resocialización y redención para transformar su vida personal, familiar y comunitaria, por ello, la resocialización no se ve como un mecanismo jurídico opcional, sino que es un deber ser del Estado para que sus ciudadanos sean rehabilitados, y convertidos en personas útiles en lineamientos de dignidad, respecto y solidaridad. En otras palabras, el Estado no puede abandonar a sus presos a su suerte, como tampoco puede maltratarlos indignamente, para ser tratados como objetos o personas de segunda o tercera clase dentro de la sociedad.

En concordancia con lo anterior, se considera pertinente ilustrar algunas nociones relacionadas al objeto de estudio para que de tal manera se delimite de forma más expedita categorías que pertenecen al campo de investigación de este trabajo como se ha reseñado en la descripción del problema y el objetivo general. Para tal efecto, se hará uso mayoritariamente de Goldstein (2010).

Derecho penal: Categoría del derecho general que regula la protección del orden ciudadano, social y convivencial por medio de una legislación represiva que persigue y determina comportamientos enmarcados como infracciones o delitos (Goldstein, 2010, p.213).

EL DERECHO A LA REDENCIÓN DE LA PENA

Ley penal más benigna: Ley que se aplica de pleno derecho, aunque haya sido distinta al tiempo de cometer el delito, al pronunciarse el fallo, en el tiempo intermedio o durante la condena (Ibídem, p.351).

Prisión: Pena que consiste en estar o permanecer encerrado por determinado tiempo en una cárcel por decisión de un juez en medio de un juicio al encontrarse culpable el sindicado (Ibídem, p.449).

Prisión preventiva: Orden del juez respecto del imputado al dictar el auto de procesamiento, salvo que confirme en su caso la libertad provisional que antes se le ha concedido, cuando al delito o al concurso de delitos que se le atribuye corresponde pena privativa de la libertad y el juez estima prima facie, que no procederá condena de ejecución condicional, si no procede conceder libertad provisional. En otras palabras, medida de seguridad adoptada por la autoridad judicial (Ibídem, p.450).

Reo: Forma de designación del procesado acusado de incurrir en un delito.

Recluso: Persona que después de haber sido condenado formalmente en un juicio penal, es recluido en un centro penitenciario para cumplir su pena. (Ibídem, p.490).

Rehabilitación: Es un conjunto de intervenciones con el propósito de *restablecer* el funcionamiento de la vida de una persona. En el contexto carcelario, es que el ser humano recobre el sentido por la vida y conducirse por el camino de la legalidad y buenas costumbres sociales y éticas ciudadanas, para evitar que vuelva infringir la ley.

Resocialización: Es una metodología penitenciaria de política de Estado, en la cual se busca que las personas privadas de la libertad se reintegren a la sociedad a la que pertenecen.

EL DERECHO A LA REDENCIÓN DE LA PENA

Redención: Es un mecanismo jurídico por medio del cual todo condenado, al cumplir con criterios y requisitos preestablecidos por la ley, tiene acceso a reducir su pena o condena. La redención está relacionada con el buen comportamiento, trabajo y educación que son aprovechados por el condenado para reducir su cese de libertad por algún delito cometido.

Centro penitenciario: Es un establecimiento estatal donde se custodian a los detenidos, condenados o sindicados para evitar que se escapen o evadan la justicia penal de un país.

Derechos fundamentales: Son facultades inherentes a todo ser humano en pro a su ejercicio ciudadano en una comunidad civilizada y organizada. Tanto el Estado como la sociedad tienen la obligación de protegerlos de manera eficiente, eficaz y efectiva.

Derechos humanos: Son derechos universales de los cuales pueden gozar todos los seres humanos, sin distinción alguna. Son imprescriptibles e inalienables. Tienen protección internacional especial, y todos los Estados están obligados a promoverlos y protegerlos.

Estado de Derecho: Forma política determinada por el imperio de la ley caracterizada por la vigencia real o formal de las normas jurídicas y la creencia en la santidad del ordenamiento jurídico. (Ibídem, p.257).

Estado Social de Derecho: Fundado por el respeto de los derechos de los ciudadanos, promoviendo la protección a la dignidad humana, la solidaridad, el trabajo y la prevalencia del interés general. Es, por tanto, obligación de los estamentos estatales garantizar el goce de los plenos derechos por parte de todos los ciudadanos sin distinción. (Sentencia T 406 de 1992).

Garantía de los derechos: Es la obligación que carga el Estado Social de Derecho de dar acceso expedito y, lo menos traumático posible, a los ciudadanos de gozar de los derechos humanos y derechos fundamentales esenciales para la vida, la paz, la dignidad y el buen vivir en la concepción

EL DERECHO A LA REDENCIÓN DE LA PENA

del ser humano. De modo, que garantizar es buscar estrategia para que haya acceso constante y reiterativo a los derechos.

2.5. Marco legal.

2.5.1. Fundamento normativo

En este aparte se dedicará a dar un muestrario de los aspectos legales que se vinculan al objeto de estudio del presente trabajo investigativo. Por ello, se hará alusión al derecho internacional y nacional. El primero, en correspondencia con los derechos humanos, convenciones y declaraciones concernientes a la asegurabilidad de los derechos ciudadanos. Luego, se pasará a la normatividad colombiana referente al marco legal penal, aspectos de la resocialización y redención, además de pronunciamientos de la Corte Constitucional por medio de sus providencias.

En el escenario internacional se constituye la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en donde se prescribe un articulado concomitante a los derechos de los ciudadanos privados de la libertad. Estos artículos son:

Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.

Artículo 10. Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.

Artículo 11.

EL DERECHO A LA REDENCIÓN DE LA PENA

1. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa.

2. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el Derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.

Los artículos de la declaración de los DD.HH. expuestos muestran todas las garantizas en materia penal que debe tener toda persona vinculada en un acto reprochable por la ley punitiva de una sociedad. En ese sentido, es claro que los derechos humanos trascienden ante cualquier acto equivocado que sea atentatorio ante la ley u otros seres humanos, es decir, que los derechos esenciales de la vida no se extinguen ni se eliminan ni se le excluyen a la persona que comete el acto punible.

Por su parte las Naciones Unidas establecieron “Reglas para el tratamiento de los reclusos”. En esta norma se prescribe:

Principio fundamental 6.

1. Las reglas que siguen deben ser aplicadas imparcialmente. No se debe hacer diferencias de trato fundadas en prejuicios, principalmente de raza, color, sexo, lengua, religión, opinión política o cualquier otra opinión, de origen nacional o social, fortuna, nacimiento u otra situación cualquiera.

Por su parte, en *El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos*, norma importante en el contexto universal se contempla:

Art. 10.1.1. Toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.

EL DERECHO A LA REDENCIÓN DE LA PENA

En la misma línea sigue La *Convención Americana de Derechos humanos, San José de Costa Rica de 1969*, expone:

Art. 5.

1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral.
2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, la persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.

La orientación similar se halla en El *Conjunto de Principios para la Protección de todas las Personas Sometidas a cualquier forma de Detención o Prisión, Naciones Unidas de 1998*. Las disposiciones enmarcadas en esta norma enfatizan sobre el tratamiento digno que deben recibir los presidiarios en los centros de reclusión. Las disposiciones son:

Principio 1: Toda persona sometida a cualquier forma de detención o prisión será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.

Principio 3: No se restringirá o menoscabará ninguno de los derechos humanos de las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisiones reconocidas o vigentes en un Estado en virtud de leyes, convenciones, reglamentos o costumbres so pretexto de que el presente Conjunto de Principios no reconoce esos derechos o los reconoce en menor grado.

En complemento, *Los principios básicos para el tratamiento de los reclusos:*

EL DERECHO A LA REDENCIÓN DE LA PENA

1. Todos los reclusos serán tratados con el respeto que merecen su dignidad y valor inherentes de seres humanos.

2. No existirá discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento u otros factores.

3. Sin perjuicio de lo que antecede, es necesario respetar las creencias religiosas y los preceptos culturales del grupo a que pertenezcan los reclusos, siempre que así lo exijan las condiciones en el lugar.

5. Con excepción de las limitaciones que sean evidentemente necesarias por el hecho del encarcelamiento, todos los reclusos seguirán gozando de los derechos humanos y las libertades fundamentales consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y, cuando el Estado de que se trate sea parte, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo, así como de los demás derechos estipulados en otros instrumentos de las Naciones Unidas.

6. Todos los reclusos tendrán derecho a participar en actividades culturales y educativas encaminadas a desarrollar plenamente la personalidad humana.

Es evidente que la normatividad internacional enfatiza en que los reclusos del mundo, tienen derecho a tener un trato digno desde todos los sentidos y dimensiones. Por ello, es totalmente prohibido que, a pesar de que algunos ciudadanos incurran en actos delictivos, continúan gozando de derechos que estén vinculados a su dignidad humana y derecho a la vida.

EL DERECHO A LA REDENCIÓN DE LA PENA

En lo que respecta al marco legal colombiano, tiene muchas afinidades con las disposiciones normativas internacionales, lo cual indica que Colombia formalmente y jurídicamente se ha puesto en sintonía con las garantías de los derechos que se piden se respeten a los ciudadanos implicados en la justicia penal. Así, el Estado Social de Derecho colombiano adquiere el compromiso de velar por la protección de los derechos humanos y fundamentales de sus reclusos.

En ese orden, subsiste la Ley 65 de 1993 *Por la cual se establece el Código Penitenciario y Carcelario Colombiano*, en este se prescribe:

Artículo 3. **Igualdad.** Se prohíbe toda forma de discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.

Esta igualdad es importante, ya que, evita preferencias entre los presidiarios en Colombia, es decir, todos deben ser tratados igual pues todas las dimensiones de la vida carcelaria, no se tolera tratos diferenciales, salvo que sean por circunstancias justificadas en razón de la pena y que no se contradiga la Constitución de 1991 y los compromisos internacionales en relación a derechos.

Así también aparecen:

Artículo 5. **Respeto a la dignidad humana.** Modificado por el art. 4, Ley 1709 de 2014.

En los establecimientos de reclusión prevalecerá el respeto a la dignidad humana, a las garantías constitucionales y a los derechos humanos universalmente reconocidos. Se prohíbe toda forma de violencia síquica, física o moral.

EL DERECHO A LA REDENCIÓN DE LA PENA

Artículo 9. **Funciones y finalidad de la pena y de las medidas de seguridad.** La pena tiene función protectora y preventiva, pero su fin fundamental es la resocialización. Las medidas de seguridad persiguen fines de curación, tutela y rehabilitación.

Artículo 10. **Finalidad del tratamiento penitenciario.** El tratamiento penitenciario tiene la finalidad de alcanzar la resocialización del infractor de la ley penal, mediante el examen de su personalidad y a través de la disciplina, el trabajo, el estudio, la formación espiritual, la cultura, el deporte y la recreación, bajo un espíritu humano y solidario.

Artículo 28. **Colonias Agrícolas.** Son establecimientos para purgar la pena, preferencialmente para condenados de extracción campesina o para propiciar la enseñanza agropecuaria.

Art. 34. **Medios mínimos materiales.** Cada establecimiento de reclusión deberá funcionar en una planta física adecuada a sus fines, a la población de internos y personal directivo.

Artículo 44. **Deberes de los guardianes.** Los miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria Nacional tienen los siguientes deberes especiales, además de los que señalen su estatuto y los reglamentos general e interno:

- a) Observar una conducta seria y digna;
- b) Cooperar con la Dirección en todo lo que tienda a la resocialización de los reclusos, suministrando los informes que estime conveniente para esta finalidad;

EL DERECHO A LA REDENCIÓN DE LA PENA

c) Custodiar y vigilar constantemente a los internos en los centros penitenciarios y carcelarios, en las remisiones, diligencias judiciales, hospitales y centros de salud, conservando en todo caso la vigilancia visual [...].

Artículo 79. **Obligatoriedad del trabajo.** El trabajo en los establecimientos de reclusión es obligatorio para los condenados como medio terapéutico adecuado a los fines de la resocialización. No tendrá carácter aflictivo ni podrá ser aplicado como sanción disciplinaria. Se organizará atendiendo las aptitudes y capacidades de los internos, permitiéndoles dentro de lo posible escoger entre las diferentes opciones existentes en el centro de reclusión. Debe estar previamente reglamentado por la Dirección General del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario. Sus productos serán comercializados.

Artículo 80. **Planeación y organización del trabajo.** <Aparte subrayado CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE> La Dirección General del INPEC determinará los trabajos que deban organizarse en cada centro de reclusión, los cuales serán los únicos válidos para redimir la pena. Fijará los planes y trazará los programas de los trabajos por realizarse. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario procurará los medios necesarios para crear en los centros de reclusión, fuentes de trabajo, industriales, agropecuarios o artesanales, según las circunstancias y disponibilidad presupuestal.

Artículo 82. **Redención de la pena por trabajo.** El juez de ejecución de penas y medidas de seguridad concederá la redención de pena por trabajo a los condenados a pena privativa de libertad.

A los detenidos y a los condenados se les abonará un día de reclusión por dos días de trabajo.

Para estos efectos no se podrán computar más de ocho horas diarias de trabajo.

EL DERECHO A LA REDENCIÓN DE LA PENA

El juez de ejecución de penas y medidas de seguridad constatará en cualquier momento, el trabajo, la educación y la enseñanza que se estén llevando a cabo en los centros de reclusión de su jurisdicción y lo pondrá en conocimiento del director respectivo.

Artículo 94. **Educación.** La educación al igual que el trabajo constituye la base fundamental de la resocialización. En las penitenciarías y cárceles de Distrito Judicial habrá centros educativos para el desarrollo de programas de educación permanente, como medio de instrucción o de tratamiento penitenciario, que podrán ir desde la alfabetización hasta programas de instrucción superior. La educación impartida deberá tener en cuenta los métodos pedagógicos propios del sistema penitenciario, el cual enseñará y afirmará en el interno, el conocimiento y respeto de los valores humanos, de las instituciones públicas y sociales, de las leyes y normas de convivencia ciudadana y el desarrollo de su sentido moral.

Artículo 142. **Objetivo.** El objetivo del tratamiento penitenciario es preparar al condenado, mediante su resocialización para la vida en libertad.

Artículo 144. **Fases del tratamiento.** El sistema del tratamiento progresivo está integrado por las siguientes fases:

2. Observación, diagnóstico y clasificación del interno.
3. Alta seguridad que comprende el período cerrado.
4. Mediana seguridad que comprende el período semiabierto.
5. Mínima seguridad o período abierto.
6. De confianza, que coincidirá con la libertad condicional.

EL DERECHO A LA REDENCIÓN DE LA PENA

Parágrafo. La ejecución del sistema progresivo se hará gradualmente, según las disponibilidades del personal y de la infraestructura de los centros de reclusión.

Como se evidencia la Ley 65 se demarca reiteradamente en el marco de la resocialización de los presos en Colombia. Es decir, que se debe prepara, en las cárceles de la nación, ciudadanos que sepan asumir su libertad luego de la condena, es decir, que sean útiles a sus familias, ciudadanía y Estado mismo, y que no recaigan en la delincuencia nuevamente. Es importante, entonces como la educación, el trabajo, las capacitaciones, los tratamientos psicológicos, el deporte, la cultura y distintos programas deben estar encaminados en rehabilitar a estos ciudadanos para que se encuentre consigo mismo, y aporte a su vida un proyecto de vida constructivo y productivo de manera positiva.

La Ley 599 de 2000, *Por la cual se establece el código penal*, estipula aspectos muy importantes para la población sindicada o condena. Cito:

Artículo 1°. **Dignidad humana.** El derecho penal tendrá como fundamento el respeto a la dignidad humana.

Artículo 3° La imposición de la pena y de las medidas de seguridad responderá a los principios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad, [...] El principio de necesidad se entenderá en el marco de la prevención y conforme a las instituciones que la desarrollan.

Artículo 4° La pena cumplirá las funciones de prevención general, retribución justa, prevención especial, reinserción social y protección al condenado.

La prevención especial y la reinserción social operan en el momento de la ejecución de la pena de prisión.

EL DERECHO A LA REDENCIÓN DE LA PENA

Artículo 5. **Funciones de la medida de seguridad.** En el momento de la ejecución de la medida de seguridad operan las funciones de protección, curación, tutela y rehabilitación.

Con lo expuesto hasta ahora no se atisba contradicción alguna entre las disposiciones internacionales y las nacionales, lo cual es coherente en propender por el respeto a los derechos humanos y fundamentales, como es el caso del estudio, de los presos colombianos. Se podría decir hasta aquí que, Colombia tiene un marco normativo garante del cumplimiento de la resocialización de sus ciudadanos cuando éste por alguna razón deba responder ante la justicia punitiva, de modo que el camino de la redención es posible en el escenario carcelario. Y aún más, los derechos de los reclusos están en toda expresión manifestados para que los funcionarios de los centros carcelarios, encargados de la seguridad y custodia, se abstengan de originar maltratos, daños o perjuicios a sus vigilados; al contrario, deben propender por contribuir a su rehabilitación.

Otras normas acordes al desarrollo de la resocialización y el respeto a los derechos humanos de los reclusos son: la Ley 115 de 1994, la Ley 1064 de 2006, la Ley 1098 de 2006, la Ley 1142 de 2007, el Decreto 177 de 2008, el Decreto 4904 de 2009 y la Resolución No. 003190 del 23 de octubre de 2013.

De la Resolución 003190 *Por la cual se determinan y reglamentan los programas de trabajo, estudio y enseñanza válidos para evaluación y certificación de tiempo para la redención de penas en el Sistema Penitenciario y Carcelario administrado por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario — INPEC, modifica la resolución 2392 de 2006 y deroga las resoluciones 13824 de 2007 y 649 de 2009*” es importante destacar literalmente lo siguiente:

Artículo 3. Criterios de funcionamiento: El Sistema de Oportunidades ofrecido por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario funcionará bajo los siguientes parámetros:

EL DERECHO A LA REDENCIÓN DE LA PENA

a. Los programas de Trabajo, Estudio y Enseñanza estructurados en el Sistema de Oportunidades fundamentan los procesos de Atención Social y Tratamiento Penitenciario.

b. Se organizan bajo el concepto de gradualidad y progresividad, con el fin de apoyar y verificar el avance del interno en su plan de tratamiento, teniendo en cuenta las fases del Tratamiento Penitenciario, el contexto de seguridad y las condiciones de infraestructura del Establecimiento de Reclusión.

d. Para la asignación de programas de Trabajo, Estudio y Enseñanza, se da prioridad a los internos condenados sobre los sindicados, no obstante, el interno sindicado o indiciado, podrá participar en estos programas de acuerdo con la disponibilidad de cupos, como parte del proceso de Atención Social orientado a prevenir o minimizar hasta donde sea posible, los efectos de la prisionalización y también para redimir la pena en caso de condenados.

Por otra parte, la jurisprudencia nacional la Corte Constitucional se ha pronunciado incesantemente por el entendimiento e importancia de la resocialización en Colombia, así como de la redención y la desaparición del estado de cosas inconstitucional en las cárceles.

En armonía a lo anterior, la sentencia T-153 de 1998, expresa claramente en uno de sus apartes que:

Las condiciones de hacinamiento impiden brindarles a todos los reclusos los medios diseñados para el proyecto de resocialización (estudio, trabajo, etc.). Dada la imprevisión y el desgüeño que han reinado en materia de infraestructura carcelaria, la sobrepoblación ha conducido a que los reclusos ni siquiera puedan gozar de las más mínimas condiciones para llevar una vida digna en la prisión, tales como contar con un camarote, con agua suficiente, con servicios sanitarios, con asistencia en salud, con visitas familiares en

EL DERECHO A LA REDENCIÓN DE LA PENA

condiciones decorosas, etc. De manera general se puede concluir que el hacinamiento desvirtúa de manera absoluta los fines del tratamiento penitenciario.

Por su parte la sentencia T-338 del 2013 ha dicho que:

La sentencia T-153 de 1998 resolvió declarar y notificar la existencia de un estado de cosas inconstitucional en el sistema penitenciario y carcelario a las diferentes autoridades públicas; revocar las sentencias de instancia y en su lugar tutelar los derechos de los accionantes; y, finalmente, adoptar nueve (9) órdenes adicionales dirigidas a las diferentes autoridades y entidades encargadas del sistema penitenciario y carcelario (por ejemplo: diseñar un plan de construcción y refacción carcelaria e implementarlo; un lugar especial para los miembros de la fuerza pública; separar a los sindicados de los condenados; investigar la falta de presencia de los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad a las cárceles de Bellavista y la Modelo, en Medellín y Bogotá; adoptar medidas de protección urgentes mientras se adoptan las medidas de carácter estructural y permanente).

En la sentencia T-718 del 2015, se dice enfáticamente, cito:

Al respecto de la finalidad de la pena, ha señalado esta Corte que, ella tiene en nuestro sistema jurídico un fin preventivo, que se cumple básicamente en el momento del establecimiento legislativo de la sanción, la cual se presenta como la amenaza de un mal ante la violación de las prohibiciones; un fin retributivo, que se manifiesta en el momento de la imposición judicial de la pena, y un fin resocializador que orienta la ejecución de la misma, de conformidad con los principios humanistas y las normas de derecho internacional adoptadas. Ha considerado también que “sólo son compatibles con los derechos humanos penas que tiendan a la resocialización del condenado, esto es a su

EL DERECHO A LA REDENCIÓN DE LA PENA

incorporación a la sociedad como un sujeto que la engrandece, con lo cual además se contribuye a la prevención general y la seguridad de la coexistencia, todo lo cual excluye la posibilidad de imponer la pena capital”. En conclusión, debe entenderse que la pena debe, entre sus varias finalidades, cumplir una función de prevención especial positiva; esto es, debe buscar la resocialización del condenado, obviamente dentro del respeto de su autonomía y dignidad, pues el objeto del derecho penal en un Estado social de derecho no es excluir al infractor del pacto social, sino buscar su reinserción en el mismo

Por los lados de la Sentencia T-762 del 2015 se estipula que:

El nivel de hacinamiento ha generado que en los establecimientos de reclusión se vulneren de manera sistemática los derechos de las personas privadas de la libertad, pues impide que éstas tengan lugares dignos donde dormir, comer, realizar sus necesidades fisiológicas, tener visitas conyugales e íntimas, ejercer actividades de recreación, de formación y de resocialización, entre otros.

Y finalmente la sentencia T-498 del 2019, recientemente ha expresado, cito:

La Corte ha señalado que las personas privadas de la libertad se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad que impone particulares deberes al Estado para con ellas, que surgen de la Constitución, la ley y la jurisprudencia constitucional. Esta última ha indicado que en el contexto de un Estado social de derecho le está permitido a este limitar el derecho a la libertad de los ciudadanos, pero ello genera en cabeza suya el deber de garantizarles las condiciones para una vida digna, de lo que surge una “especial relación de sujeción”, en la medida en que la situación de detención conlleva a que estos se encuentren sometidos al régimen disciplinario del lugar en el que se hallen y aquél tiene el deber de asumir el cuidado y la protección de sus

EL DERECHO A LA REDENCIÓN DE LA PENA

derechos.

Como se ha podido entrever, desde el derecho internacional hasta el derecho nacional en Colombia, existe un sistema jurídico en el área penal que aspira a que los reclusos se les garanticen los derechos humanos y fundamentales dentro del espacio carcelario. Y en el momento en que se ven amenazadas las garantías de sus derechos, la Corte Constitucional es la gestora de exhortar a que se tomen medidas por parte del legislativo y el gobierno de turno para que el Estado oriente su deber de proteger los derechos de la personas privadas de la libertad; y así, sea posible programas de resocialización que verdaderamente sirvan para que se restaure un ser humano digno de una sociedad que tiene como valor supremo la paz, la solidaridad y el buen vivir comunitario.

EL DERECHO A LA REDENCIÓN DE LA PENA

Capítulo III

3. Diseño metodológico

3.1. Método de investigación

Entrando a esta instancia, los métodos en la investigación son elementos importantes, dado que, muestran el paso o camino específico con el cual el investigador va a asumir su estudio. En ese sentido, en el referente trabajo, hubo aplicación de la metodología concebida como analítico – descriptivo. La cual se desenvuelve por medio de la indagación de distintas fuentes de tipo jurisprudencial, doctrinal, normativo, con soportes bibliográficos de tipo virtual y físico, además de la incorporación de informes oficiales, como resúmenes de la Corte Constitucional, leyes, resoluciones y artículos científicos relacionados al tema de investigación, que después de seleccionarlos, clasificarlos, categorizarlos, analizarlos se realiza un estudio crítico e interpretativo de la información recolectada, de modo que se pasa a resolver los interrogantes forjados del objeto de estudio (Bechara, 2018).

3.2. Tipo de Investigación

Se debe señalar que el tipo de investigación es deductivo y analítico, teniendo en cuenta que éste esencialmente se concibe con la orientación basada en conceptos jurídicos, jurisprudenciales, análisis científicos y doctrinales, que delinean los aspectos de la indagación sobre el objeto de estudio, con el propósito de comprenderlo y explicarlo, teniendo en cuenta circunstancias, generalidades y universalidad del tema para llegar conclusiones específicas, causas y efectos diversificados y comprobados. (Ibídem).

EL DERECHO A LA REDENCIÓN DE LA PENA

3.3. Corte de la investigación

Este trabajo es de corte bibliográfico y documental, dado que el material a estudiar es para realizar un ejercicio hermenéutico y crítico. Por ello, se realiza un proceso de recopilación, análisis e interpretación respecto a lo hallado en las múltiples lecturas y, asimismo de la intertextualidad efectuada desde los diferentes autores utilizados. De tal manera, se toman fuentes, como ya se mencionó, textos físicos y electrónicos.

3.4. Análisis y discusión de los resultados.

3.4.1. Fundamento jurídico del derecho a la redención de pena de los condenados a prisión en Colombia.

En Colombia, el Congreso de la República tiene plenas facultades de crear leyes que afectan la política y la justicia a nivel nacional. En esa medida el derecho penal no queda excepto de tales efectos, por ello la política criminal colombiana, por disposición de la Constitución política remite al Legislador a establecer derroteros, normatividad y lineamientos penales y penitenciarios.

De ese modo, el Congreso tiene el deber jurídico de expedir normas de contenido específicamente de derecho punitivo, y en ese quehacer le corresponde determinar:

1. Conductas punibles.
2. Quantun de las penas
3. Y las situaciones o circunstancias que las aumentan y las disminuyen

Ahora bien, hay que tener claro que cuando el Legislador asume este deber está supeditado a criterios constitucionales vinculados al respecto de la dignidad humana, los derechos humanos, aplicación de la proporcionalidad, razonabilidad y los acuerdos internacionales que se tornan

EL DERECHO A LA REDENCIÓN DE LA PENA

obligatorios al ser firmados y ratificados que se incluyen el bloque de constitucionalidad (Sentencia, T-100 del 2018).

Es evidente entonces que el Congreso para asuntos de fijar normas penales debe plegarse a las disposiciones de valor y principio constitucional, pues en su ejercicio de establecer penas y sanciones, también debe tener presente que las penalidades tienen un propósito resocializador donde prevalecen los derechos humanos, y la convivencia armónica, solidaria y pacíficas entre los ciudadanos (Ibídem). Así las cosas, el Estado propenden por regenerar un ciudadano para que después de cumplir la pena, sea una persona activa en la sociedad, y contribuya a su desarrollo social, cultural, político y convivencial.

Se puede afirmar que la redención, por filtro de la resocialización, responde a principios como la dignidad humana, la libertad y el libre desarrollo de la personalidad, pues la reeducación y la reinserción del ciudadano condenado es una obligación institucional. En ese sentido, la redención no es algo caprichoso ni es facilismo de la política criminal de un país, sino que responde a una filosofía humanista con criterios de reformatión y recuperación de un ser humano que infringió la ley en un lapso de tiempo, pero que no puede ser ápice para desproveerlo de derechos por siempre o durante su condena (ibídem).

En palabras literales de la Corte Constitucional colombiana, expresa que:

Acuerdo con la legislación y la jurisprudencia vigentes, la educación es la base de la resocialización, y que la figura de la redención de la pena es la materialización de la función resocializadora de la sanción. En conclusión, en ejercicio de su potestad normativa, el Congreso debe tener en cuenta las funciones de la pena, dentro de las cuales está, como la más importante, la resocialización. Así pues, el Legislador ha previsto que el trabajo, el

EL DERECHO A LA REDENCIÓN DE LA PENA

estudio y la enseñanza son medios para alcanzar el fin resocializador de la pena y tienen la virtud de aminorar su tiempo de duración a través de su redención (T-429 de 2010).

En idea de la Corte, la resocialización es la razón de ser de la política carcelaria de Colombia, es decir, el hecho de que un ciudadano incurra en una conducta punible, el Estado no tiene como fin que permanezca perpetuamente en ella, como castigo ejemplar, sino que sea regenerado a través de la educación, el trabajo y demás programas para que, en el menor tiempo posible, de cumplir con los requisitos, salga de la cárcel a ser un asociado útil a su familia y a la sociedad en general. Esta es la razón de la redención.

Remitiéndose a lo más específico y normativo se encuentra el artículo 103A de la ley 65 de 1993 que indican de manera textual que: “La redención de pena es un derecho que será exigible una vez la persona privada de la libertad cumpla los requisitos exigidos para acceder a ella. Todas las decisiones que afecten la redención de la pena, podrán controvertirse ante los Jueces competentes”.

Redención de pena durante la prisión domiciliaria.

La persona sometida a prisión domiciliaria podrá solicitar la redención de pena por trabajo o educación ante el Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de acuerdo a lo señalado en este Código. Las personas sometidas a prisión domiciliaria tendrán las mismas garantías de trabajo y educación que las personas privadas de la libertad en centro de reclusión.

Parágrafo. El Ministerio de Trabajo generará en coordinación con el Ministerio de Justicia y el Inpec las condiciones necesarias para aplicar la normatividad vigente sobre teletrabajo a las personas sometidas a prisión domiciliaria.

EL DERECHO A LA REDENCIÓN DE LA PENA

Estudio:

El privado de libertad recibirá un día de redención de pena por cada dos días de estudio de seis horas cada uno, así sea en días diferentes. El procesado no podrá dedicar más de 6 horas de estudios al día (Código Penitenciario y Carcelario artículo 99A, 20 de enero 2014).

Enseñanza:

El procesado previamente calificado que eduque a otros reos, bien sea en alfabetización, educación primaria, secundaria, artesanal, técnica y superior, se le computarán cuatro horas de enseñanza como si fuera un día de estudios, es decir, que por cada ocho horas de enseñanza recibirá un día de redención de la pena. (Código Penitenciario y Carcelario artículo 98, 20 de enero 2014).

Actividades extracurriculares:

El privado de libertad que participe en "actividades literarias, deportivas, artísticas y las realizadas en comités de internos, programados por la dirección de los establecimientos", se le computará la redención como si estuviera estudiando, es decir, por cada dos días de actividades extracurriculares de seis horas cada uno recibirá un día de redención de pena" (Código Penitenciario y Carcelario artículo 99A, 20 de enero 2014)

Trabajo Comunitario:

Código Penitenciario y Carcelario reconoce la rebaja de penas en Colombia para aquellos condenados a prisión que cumplan con servicio comunitario, y el tiempo dedicado a tales

EL DERECHO A LA REDENCIÓN DE LA PENA

actividades redimirá la pena. El beneficiado que opte por este beneficio debió ser condenado a una pena no mayor a cuatro años y el servicio comunitario lo debe efectuar dentro de la ciudad o municipio que sirve como sede del recinto penitenciario. Tanto el director carcelario como la Alcaldía local acordarán las condiciones de la prestación del servicio y la vigilancia. También puede realizar trabajo comunitario en el desarrollo de obras ejecutadas por ingenieros militares” (Código Penitenciario y Carcelario artículo 99A, 20 de enero 2014).

Estas modalidades importantes otorgan beneficios para las personas privadas de la libertad que son sindicadas, o condenadas a prisión con sentencias en firme, que se les sigue brindando el acceso a los derechos que tienen a una reducción parcial de su pena; esto, como ya se mencionó, cumpliendo estrictamente con los requerimientos tanto legales como administrativos. Evidenciando, a través del seguimiento al que son sometidos, en que su conducta se ajusta de manera positiva a lo que se considera disciplina, buen ejemplo y buena conducta convivencial en la prisión y, por lo tanto, merecen una oportunidad para ser parte activa de la comunidad de la cual han sido separados temporalmente por comisión de un delito. No se pierda de vista que el objetivo principal de la sanción, como ya se aprendió de la Corte Constitucional, es la reincorporación a la vida extramural.

La corte Suprema de justicia manifiesta que la redención pena no es un beneficio como muchos manifiestan, sino que es un derecho. En ese sentido este derecho es una manifestación esencial unida a la resocialización, puesto que el derecho punitivo en Colombia tiene una función especialmente protectora y preventiva; por ello cobra su máximo significado y materialización la recuperación y reinserción del condenado para el Estado Social de Derecho. En otras palabras, el alcance y fin superior de un Estado civilizado como el colombiano debe ser perseguir que sus

EL DERECHO A LA REDENCIÓN DE LA PENA

ciudadanos al incurrir en un delito, sean capaces de superar ese pasaje delincuencial de vida, y se hagan ciudadanos de bien constructivos y constructores de desarrollo y paz (Sentencia 35767 - 2012).

Debe advertir la Corte Suprema que, de acuerdo con la legislación y jurisprudencia vigentes, la educación es la base de la resocialización, actividad que trae consigo la posibilidad de redimir pena. Esto quiere decir que previo cumplimiento de los requisitos exigidos y agotado el correspondiente trámite administrativo, hay lugar a que los penados rediman pena y simultáneamente alcancen la resocialización. No obstante, también hay que tener claro que, Cito:

La resocialización materializada en la posibilidad de redimir pena por estudio, enseñanza, trabajo, actividades deportivas y artísticas, y cualquier otro mecanismo que llegare a diseñar el legislador a través de la política criminal estatal, no es absoluta ya que encuentra límite en los principios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad de la pena impuesta al condenado, esto significa que el descuento de días de prisión física no puede llegar al extremo de convertir la condena en una medida inocua que desconozca los fines preventivo y retributivo de la intervención penal. (Sentencia T 718 - 2015).

La precisión que realiza la Corte sobre el fin y alcance la redención es importante, porque no se puede enviar el mensaje equivocado a la sociedad que esta se convierta en un puente o atajo legal para que los presos o delincuentes de la nación obvien responsabilidades penales. Lo cual quiere decir que, la redención, si bien es un derecho de todo privado de la libertad, está se debe realizar con el estándar más alto de cuidado para las autoridades, porque su sentido es que realmente un presidiario sea reeducado y regenerado, y reciba una oportunidad que merezca para rehacer su vida

EL DERECHO A LA REDENCIÓN DE LA PENA

ciudadana con sentido de pertenencia, aporte a la vida social y al desarrollo de la convivencia pacífica desde todas las dimensiones.

Es importante anotar que el derecho de redención de la pena no se excluye por el tipo de delito, es decir no tiene un diferenciador penal. Por ejemplo, no se puede decir que la redención se puede aplicar un ciudadano que se robó un celular o incurrió en peculado y no a aquel que violó a un infante o asesino a una mujer por ser estos dos últimos más graves. En estos aspectos la Corte Constitucional ha sido enfática en afirmar que no se vulneran los derechos de la mujer ni de infantes como víctimas, pues el penado ha recibido su sanción en razón a su acto reprochable, y la redención es aplicable propiamente al reo con fundamento a los principios constitucionales de la dignidad humana, la justicia, la igualdad que se incluyen en las políticas de criminalidad del país. En otras palabras, cito:

Es claro entonces que al negar la redención de la pena por este tipo de delitos se vulneran varios derechos fundamentales y el pilar constitucional esencial de la dignidad humana que cataloga a Colombia como un Estado social de derecho, democrático, participativo y pluralista, fundando en la dignidad humana, el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y que prevalece el interés general (Paredes Medina, 2016, p.16)

Al no darle acceso al derecho de redención a ciertos presos porque se consideran sus delitos más graves que otros o más reprochables que otros, se incurre en la no solidaridad entre los conciudadanos, y a toda esa política internacional de derechos humanos que persigue la reinserción de los privados de la libertad a la vida pacífica y regenerada. De lo contrario, el mensaje sería que el Estado Social de Derecho, propendería por el castigo duro, vengativo e inclemente, donde sus ciudadanos no tendrían nuevas oportunidades ante su sociedad.

EL DERECHO A LA REDENCIÓN DE LA PENA

Además de ello, negar el acceso al trabajo como mecanismo de redención de la pena a un reo, sumado a que irrumpe derechos fundamentales, también lesiona acuerdos ante la OIT (Organización Internacional del Trabajo), específicamente al convenio 29, dado que desde la dignidad humana todo ciudadano tiene derecho al trabajo, y en especial condición cuando está privado de la libertad, para acceder a la resocialización. (Sentencia C 394 - 1995).

De modo que con lo anterior queda claro que ningún privado de la libertad debe ser limitado, actualmente, de la redención de pena, salvo que el Congreso de la República en sus plenas facultades, lo estime necesario, y halle una fórmula legal y constitucional que no contradiga convenios internacionales y el bloque de constitucionalidad, para excluir a reos de acceder al derecho de redención por cometer determinados delitos.

Por otro lado, en lo que concierne a mecanismos para defender su derecho a acceder a la redención y, por ende, al cumplimiento de la resocialización por parte del Estado, los presidiarios pueden accionar a través de acciones de tutelas y demás mecanismos judiciales pertinentes para que se le dé acceso a su derecho. Por tanto, el Estado no puede otorgar el derecho a la redención de la pena como mero acto facultativo u opcional, sino que es obligatorio abrir los caminos que la hagan posible la concreción de una resocialización real y efectiva. Para ello, debe haber un compromiso de las entidades o entidad encargada de esta función. En esta línea, la Corte Constitucional a través de la Sentencia T-603 de 2017 expreso:

El Estado está en la obligación de consolidar la función resocializadora de las personas condenadas a penas privativas de la libertad. Por esta razón, quienes se encuentran en estado de sujeción cuentan con las garantías constitucionales de cualquier ciudadano y, de la

EL DERECHO A LA REDENCIÓN DE LA PENA

misma manera, si consideran vulnerados sus derechos fundamentales, están legitimados para accionar ante los organismos judiciales en busca de la protección de los mismos.

Por ello, con lo ilustrado no debe quedar duda que la redención es un derecho o prerrogativa que todos los presos en Colombia deben tener acceso sin ninguna distinción. Y en el acto de que el Estado, representado por el Inpec u otra institución que haga sus veces, lo obstaculice el acceso al mencionado derecho, puede el reo como cualquier otro ciudadano, activar los mecanismos judiciales adecuados para exigir su aplicabilidad.

Ahora bien, es pertinente retomar dos elementos importantes, mencionados arriba, para el ejercicio de la redención, y estos son la educación y el trabajo. Pues es de entender que no es de cualquier forma que se accede a la redención, sino que la educación y el trabajo son dos mecanismos claves para su consecución a través de la resocialización.

La educación como derecho fundamental de una nación juega un papel esencial en las cárceles, pero no desde el simple enfoque instructivo sino también desde su enfoque filosófico, didáctico y moralizante de cambio conductual para formar seres humanos autónomos, libres, responsables y constructivos para la sana convivencia y la paz. Así pues, en los centros presidiarios es importante que se cuente con enseñanza de oficios técnicos útiles, alfabetización, y programas de instrucción superior. En esta orbita, la educación debe tener una pedagogía acorde al plan penitenciario, es decir, adaptada al contexto y ambiente carcelario. Ahora, en ningún momento la educación impartida debe entrar a lesionar creencias religiosas o pensamientos propios de la vida del reo, sino enfocarse en un aspecto ético generalizador y de valores universales sin atentar con el libre desarrollo de la personalidad (Sentencia T-603 de 2017).

EL DERECHO A LA REDENCIÓN DE LA PENA

En la perspectiva educacional, “Estado tiene la obligación de implementar [...] programas de educación” que le permitan al presidiario formarse con una formación que signifique algo positivo e impacte en el momento de recuperar la libertad (Sentencia, T-448 de 2014), en ese sentido, que sea un ciudadano que salga preparado para ser productivo para la sociedad, su núcleo familiar y para sí mismo.

En lo que concierne a la esfera del trabajo, este es obligatorio, y se asume como un método terapéutico, es decir, el trabajo tiene una dimensión para reducir la pena y, por otro, un medio para que el reo se ocupe con fines de terapia para beneficiar la convivencia y la vida del ciudadano condenado. Sin embargo, el hecho de que sea obligatorio, no quiere decir que se pueda ejercer de forma voluntaria. Es decir, todo aquel que tenga deseo de trabajar puede hacerlo, previo cumplimiento de requerimientos.

No obstante, hay unas exclusiones, que son: no se obliga al trabajo personas mayores de 60 años, a las mujeres embarazadas tres meses antes de su parto y, tampoco un mes posterior al mismo; como tampoco a condenados que sufran una grave enfermedad que los inhabilite para realizar una actividad. A los sindicados y penados se les abonará un día de reclusión por dos días de trabajo. Cada día tiene como límite ocho horas diarias de trabajo (Sentencia, T-429 del 2010).

El trabajo estando reclusos les permite estar en actividad constante, estar pensando en cosas productivas, estar ejerciendo una actividad útil, y además de ello de sufragar gastos propios como también de su familia. Esto envía un mensaje de fondo, y es que a través del trabajo el recluso antes de recobrar su libertad puede beneficiar a su familia con el dinero ahorrado, el cual tiene un manejo estipulado por la ley. Así las cosas, la resocialización como materialización del derecho de redención, se convierte en un mecanismo constitucional y legal transcendental para la vida del reo,

EL DERECHO A LA REDENCIÓN DE LA PENA

y sobre todo de los presos responsables y comprometidos, afectando además a la sociedad, la familia y al espíritu institucional de manera positiva. En ese sentido, el trabajo cumple una función de sentido social y personal para el recluso; y una satisfacción al sistema resocializador de la institucionalidad carcelaria.

En fin, los fundamentos jurídicos de la redención son muy sólidos en Colombia, pues desde el Congreso, como estamentos supremos que recibe facultad del constituyente primario para elaborar leyes, se instaura su consolidación, siguiendo las disposiciones internacionales de los derechos humanos, convenios y acuerdos que protegen los derechos de los procesos. Por ello, no se puede entender la redención como un aliciente a la delincuencia y a la criminalidad de un país, sino como la manifestación humanizada del Estado Social de Derecho que siempre debe propender por buscar lo mejor de sus ciudadanos a través de la dignidad humana, la solidaridad, la igualdad y la paz.

3.4.2. El impacto de la resocialización de los privados de la libertad en Colombia.

Como se ha venido mencionándose en el desarrollo del trabajo, la resocialización es la ejecución de distintos programas que buscan que los internos tengan la oportunidad de reinserirse a la sociedad colombiana como personas de buenas conductas, y que han logrado corregir su comportamiento al salir de espacio carcelario a instancia de cumplir una sanción tras las rejas.

En ese sentido, la resocialización es un deber estatal que se debe ofrecer de manera organizada, constante y general en todas las cárceles del país. Esta se ofrece por medio de programas educativos y trabajo. Resocializar a un convicto es tener como misión que ese ciudadano logre reflexionar, y encontrarle sentido a su vida posterior a su delito, es decir, que no se quede en el escenario de la delincuencia. De tal manera, el Estado aspira a que allá más sana convivencia entre sus asociados, además de disminuir el índice de criminalidad. Las cárceles se deben asumir entonces, no como

EL DERECHO A LA REDENCIÓN DE LA PENA

centros de castigo sino como instituciones de recuperación para entregar a la sociedad un mejor individuo.

Por ello, es inconcebible que, en las cárceles contemporáneas, y en un Estado Social Derecho no se aplique como regla general y dentro de su política criminal la resocialización como objetivo de reinserción. En palabras de Preciado Burgos se puede entender que:

La resocialización implica un proceso de enseñanza y educación de valores y principios éticos-formativos, los cuales la persona que se encuentra en Centros Carcelarios deba meditar y aportar, además, se debe adoptar un tratamiento a través de métodos de aprendizaje que permitan la interiorización de tales principios y valores para así lograr el fin último del adecuado regreso a la sociedad de esa persona (2020, p. 141).

(Meza, 2018) en su investigación los análisis de la conciliación extrajudicial civil en la Costa Atlántica colombiana. Encontró que

“La Constitución política de Colombia protegió el acceso a la justicia como un derecho de las personas dentro de la función jurisdiccional del Estado en sus artículos 228 y 229. Esta función no es exclusiva de los jueces de la Republica, tal como lo mencionó la Corte Constitucional en sentencia C- 1195 de 2001, al manifestar lo siguiente:

Según la jurisprudencia de esta Corporación, el derecho a acceder a la justicia tiene un significado múltiple. Entre otros, comprende contar con procedimientos idóneos y efectivos para la determinación legal de derechos y obligaciones, que las controversias planteadas sean resueltas dentro de un término prudencial y sin dilaciones injustificadas que las decisiones sean adoptadas

EL DERECHO A LA REDENCIÓN DE LA PENA

con el pleno respeto del debido proceso, que exista un conjunto amplio y suficiente de mecanismos para facilitar el proceso.

Si bien es importante que en Colombia haya todo un compendio constitucional y legal sobre el derecho de redención y, por ende, toda una disposición organizada sobre la resocialización, también es transcendental revisar, desde la experiencia de otras investigaciones y trabajos, que tanto está impactando este mecanismo en la sociedad colombiana. En otras palabras, es valioso mirar que tanto ha ayudado a reducir la criminalidad, dignificar las cárceles y dignificar la vida de los reos.

Vicisitudes o dificultades que se hayan en las cárceles de Colombia desde hace mucho tiempo son: la pésima prestación de servicios públicos, el hacinamiento, el deterioro de las infraestructuras, carencia en aspectos educativos y terapéuticos, la violencia delincuencia interna, el micro-tráfico de droga, extorciones, entre otros males que aquejan a diario y que no es secreto para la sociedad colombiana.

Los problemas de prestación de servicio esenciales adecuados como el agua, por ejemplo, menoscaba la dignidad de los reclusos, pues en ocasiones son sometidos a largas jornadas de sed, no se pueden bañar sino hasta ciertas horas, entre más dificultades. Tal falencia se convierte en una variable que obstruye el ejercicio pleno de la resocialización, porque tal problema de buenos servicios genera irrespeto a los derechos humanos del interno, y de alguna manera va alimentando resentimiento y un sentimiento de venganza, y de ciudadano de segunda mano, esto es, de poca importancia.

Por ello, la resocialización no se puede entender sólo en la dimensión de enseñar oficios o alfabetizar, sino que trasciende desde el cuidado de los derechos de los reclusos que son protegidos desde los escenarios internacionales y el nacional a través de la Constitución política.

EL DERECHO A LA REDENCIÓN DE LA PENA

De modo que, al hablar de derecho, pero vulnerarlos crea una incongruencia en la práctica carcelaria, y tal ánimo de incoherencia se ve remitido a los reos (Ibídem, p. 145).

Por otro lado, el hacinamiento es otro problema que se suma a la realidad carcelaria. La sobrepoblación impide dar calidad de espacio, de servicios y de convivencia. Desde el 2012 al 2018 la población en las cárceles se ha incrementado de manera considerable en el país, lo cual ha llevado que la Corte Constitucional realice llamados a los entes competentes para la corrección de este problema que impide que se genere problemas para ofrecer con eficacia los programas de resocialización a los presos (Hernández Jiménez, 2018, p.10).

Es evidente que, al existir sobrepoblación, y no se cuente con los suficientes recursos humanos y materiales dificultan la calidad y cobertura para ofrecer servicios, este es el caso de las cárceles de Colombia, pues al estar saturadas no todos los reclusos van a tener la oportunidad acceder a programas de resocialización de manera efectiva, o deben esperar cupos. Para corroborar lo dicho, la Corte Constitucional ha apuntado, cito:

Ese nivel de hacinamiento ha generado que en los establecimientos de reclusión se vulneren de manera sistemática los derechos de las personas privadas de la libertad, pues impide que éstas tengan lugares dignos donde dormir, comer, realizar sus necesidades fisiológicas, tener visitas conyugales e íntimas, ejercer actividades de recreación, de formación y de **resocialización**², entre otros. (T-762 del 2015).

Como se atisba, es claro que la resocialización no es un elemento abstracto ni plenamente discursivo, por

² Negrilla fuera del texto original.

EL DERECHO A LA REDENCIÓN DE LA PENA

ello, se ve afectado por otros problemas como el hacinamiento, y la falta de cumplimiento de otros servicios. No hay entonces que negar que la sobrepoblación debe desaparecer gradualmente para que también vaya mejorando la garantía de la resocialización en la población reclusa.

Otra variable es la violencia incesante que a diario los distintos medios de comunicación revelan. El hecho de que haya actos violentos en los centros de reclusión (violaciones, homicidios, motines, etc.) indica que algo muy grave está sucediendo con los programas de resocialización en las cárceles donde se presentan tales hechos. No es concebible que en las cárceles la violencia se normalice y se mire como algo de esperarse, ya que en ellas reposan delincuentes. Por ello, las sociedades donde esto suceda, como es el caso Colombia, debe ser motivo de reflexión y alarma, pues el mensaje de fondo es que la política criminal del país está fallando, y que la convivencia sana y la paz social está en constante peligro.

En sentido de lo anterior, la Honorable Corte Constitucional expresa muy vehementemente que:

La violencia al interior de las prisiones es un asunto que compete a muchos sistemas penitenciarios y carcelarios en el mundo, pero en especial a aquellos que se encuentran en situación de hacinamiento. La sobrepoblación carcelaria, por sí misma, propicia la violencia [...] Esto lleva a que la corrupción y la necesidad generen un mercado ilegal, alternativo, en el cual se negocian esos bienes básicos escasos que el Estado debería garantizar a una persona [...].

La violencia, según la Corte, es un derivado propio del hacinamiento. Generando aspectos negativos a la convivencia de los centros de reclusión, y de tal manera, debilita el propósito de las políticas de resocialización, en efecto, se muestra débil el Estado en su misión de garantizar para la sociedad un individuo regenerado y útil para el derecho social y humano de la nación.

EL DERECHO A LA REDENCIÓN DE LA PENA

A lo anterior se suma, también el tráfico de drogas o sustancias psicoactivas que genera todo un escenario de ilegalidad y conductas reprobables. El hecho de que haya drogadicción en una cárcel indica que la seguridad está en un estado gravísimo, y que hay un alto nivel de tolerancia de parte de la institución encargada de su administración. Este aspecto, es contradictorio con los valores éticos y morales que se deben inculcar desde los programas de resocialización (T-762 del 2015).

Otro aspecto, que pone en evidencia los problemas de garantías de derechos fundamentales y, en particular la ejecución efectiva de la resocialización, es el mal funcionamiento del sistema de salud. La vitalidad del ser humano, y su cuidado es transcendental en cualquier sociedad, y en especial en la sujeción especial que tiene los reclusos hacia el Estado. Por ello, la Corte Constitucional insiste en que esté problema debe desaparecer de manera progresiva. Como se mencionó arriba, la resocialización está unida, a la garantía de otros derechos para que tenga lógica y sentido congruente y ético. Pues no se puede pretender que un ciudadano sea reformado desde la educación y el trabajo, mientras está recibiendo un trato indigno por otro lado, desde su salud y desde sus garantías mínimas de vida como ser humano.

Otro asunto importante es que en algunos centros de reclusión la socialización sobre la resocialización no es muy efectiva. Es decir, no se socializa de manera adecuada, y en otras ocasiones no se les incentiva a los reos a participar en la misma de manera efectiva. Con esto, se indica que el mecanismo en algunos centros carcelario no es tomado con la seriedad del caso, o se le da poca transcendencia. De esta manera se contradice a la Constitución y a la ley 65 (Hernández Jiménez, 2018, p.30-31). Este aspecto señalado es grave puesto que, se está poniendo en peligro e ignorando desde algún grado la política criminal de Colombia a través de la resocialización en su consecución de reformar a un ciudadano.

EL DERECHO A LA REDENCIÓN DE LA PENA

Sobre lo anterior se une que algunos programas de reeducación son débiles e insuficientes o revisten poca efectividad “cumpliendo la pena otras funciones distintas de la especialmente encomendada por el constituyente y los legisladores (Ibídem, p.31). En ese orden, es preocupante que un mecanismo tan importante no se procure optimizarlo para que tenga el sentido social, político y convivencial que sigue.

Todo lo anterior, ha originado la existencia de un fenómeno que la Corte Constitucional ha calificado como el estado de cosas inconstitucionales en las cárceles de Colombia. Cuando algo está contrario a las misiones, visiones y aspiraciones consignadas en la Constitución Política de 1991, se configura en inconstitucional, es decir, no está concretándose ni está siendo realidad lo que se espera en cuanto a la realización de derechos. La Corporación guardiana de los derechos constitucionales ha dicho:

La figura del Estado de Cosas Inconstitucional, es aquella mediante la cual esta Corte, como otros Tribunales en el mundo, ha constatado que en algunas situaciones particulares el texto constitucional carece de efectividad en el plano de la realidad, tornándose meramente formal (T-762 de 2015).

Bajo el criterio de la Corte, la falta de efectividad de los derechos consagrados en la carta constitucional termina siendo un acto mero discursivo, pues un país no puede convivir con las formalidades discursivas de su derrotero jurídico superior, sino que tiene que reflejarse en la vida real y material de la gente día a día. Los derechos son reconocidos para experimentarlos y sentirlos.

Todo ese estado inconstitucional de las cosas que se sintetizan en la violencia en las cárceles, falta de garantías en la salud, los problemas de convivencia interna, la drogadicción y la falta de

EL DERECHO A LA REDENCIÓN DE LA PENA

eficacia y calidad de los programas educativos en algunos centros de reclusión imposibilita el ejercicio del derecho de redención, y en efecto, de la resocialización efectiva.

La redención y la resocialización se lesionan con la existencia de las cosas inconstitucionales porque:

Se predica de aquellas situaciones en las que (1) se presenta una repetida violación de derechos fundamentales de muchas personas - que pueden entonces recurrir a la acción de tutela para obtener la defensa de sus derechos y colmar así los despachos judiciales - y (2) cuando la causa de esa vulneración no es imputable únicamente a la entidad demandada sino, también a factores estructurales (SU-090 de 2000).

Siguiendo lo expresado por la Corte tiene mucho sentido si comprende que no tiene coherencia que el Estado, intente resocializar a un convicto diciéndole que se deben respetar los derechos humanos de las personas y que no es viable delinquir, cuando a su vez, pone a experimentar a ese ciudadano violaciones de derechos esenciales por parte del ente institucional que se los debe garantizar, y que le está intentando reformar su vida para reinsertarlo a la sociedad. Por ello, es importante que se superen todos los problemas estructurales que afectan la situación de las cárceles de Colombia.

Por parte de la investigación realizada por Abadías Arias (2011) encuentra que en la Cárcel de varones de Manizales los presidiarios asumen la pena como una instancia para mejorar sus técnicas criminales, y toman el programa de resocialización como mero atajo para alcanzar más rápidamente la libertad (p.56). Tal hecho, es grave dado que la resocialización no está en su función esencial que es verificar que en verdad el ciudadano privado de la libertad está siendo transformado significativamente para reinsertarse a la comunidad.

EL DERECHO A LA REDENCIÓN DE LA PENA

No obstante, no todo es negativo, pues hay también ciudadanos que han caído en la clase que les ha servido de mucho pertenecer al programa de resocialización, lo cual ha significado para su reincorporación en la sociedad, su familia y personalidad. Si bien, no es generalizado este fenómeno por causa de los problemas estructurales que ya se mencionaron arriba, es transcendental que se materialice en la vida de la gente tales programas re-socializantes, lo cual indica que ha servido las mejoras que sugirió la Corte Constitucional a través de su jurisprudencia, aunque haya mucho por mejorar (Álvarez y Micahán, 2018, p. 68).

Lo que es alarmante de todo esto, es que indica problemas con la política criminal del país, pues como ya se mencionó, la resocialización hace parte esta política que busca combatir la delincuencia no con castigo y venganza sino con transformación del ciudadano desde su estado moral y ético para disminuir y, por no eliminar desde la reeducación y el trabajo para la convivencia pacífica de la nación. Por ello, varios críticos coinciden que la materialización de la resocialización debe ser vigilada con mayor compromiso por parte del Estado y, exigir su aplicabilidad con rigor, y, sobre todo, no permitir que esta no sea un simple método para recobrar la libertad para reincidir en actos delictivos.

Todo ello lleva a considerar que la existencia de cosas inconstitucionales es el enemigo más grande que tiene la política resocializadora en Colombia, pues su efectividad involucra variables exógenas ya indicadas entre los que están el hacinamiento, la violencia y la debilidad de los programas educativos. Así las cosas, como real motivación lo que expresa la Corte Constitucional:

La violación masiva de los derechos constitucionales a la vida en condiciones dignas, a la salud, al agua potable, a la resocialización de los condenados penalmente, entre otros, pues es notorio que la gran mayoría de las personas privadas de la libertad, sometidas a las actuales condiciones de reclusión, que revela el caudal probatorio, han sido desprovistas no

EL DERECHO A LA REDENCIÓN DE LA PENA

solo del derecho a la libertad, como lógicamente corresponde, sino del ejercicio de muchas de las demás garantías constitucionales, sin que ello pueda ser admisible en un Estado Social de Derecho (Sentencia T-762 de 2015).

En conclusión, la resocialización en las cárceles colombianas no ha tenido un impacto significativo en los ciudadanos privados de la libertad, lo que indica que hasta ahora es una política que se ha quedado en el plano formal y discursivo, lo que se necesita trabajar más por parte de las instituciones competentes para que puede comenzar a crear un cambio social entre los reclusos de manera más positiva (Hernández Jiménez, 2018, p.33).

Lo anterior sugiere, como ya lo ha dicho la Corte Constitucional y demás investigadores citados, que el Estado debe propender por eliminar la existencia de cosas inconstitucionales en los centros de reclusión, además se hacer un seguimiento serio y comprometido de los programas de resocialización y su garantía de participación para toda la población carcelaria, por ello la sobrepoblación es un elemento que debe comenzar a darle solución para que haya verdadero acceso a los programas de trabajo y educación.

Esto va unido a reformar políticas de criminalidad en el país que sean encaminadas en respetar los derechos humanos realmente, lo que se debe mejorar con urgencia el sistema de salud carcelario, los servicios de agua potable, alimentación y demás derechos esenciales que se vulneran reiteradamente a los reclusos.

3.4.3. Crítica frente a la vigencia del derecho de redención de pena y resocialización respecto al sistema penitenciario y carcelario en Colombia.

La Constitución Política de 1991 de Colombia en su preámbulo expresa que en la nación dentro de su marco jurídico democrático propende por valorar la vida, la convivencia, la justicia, el

EL DERECHO A LA REDENCIÓN DE LA PENA

trabajo, la igualdad y la paz. Unido ello, el artículo 1 manifiesta sobre el respeto por la dignidad humana, el trabajo y la solidaridad. El artículo 2 consagra dentro de los fines del Estado asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo, además de proteger la vida, honra y derechos de los ciudadanos colombianos. El artículo 5 fija la responsabilidad del Estado en pro de reconocer la primacía de los derechos inalienables. El artículo 12 consigna que ninguna persona debe recibir tratos inhumanos y crueles. En lo sucesivo la disposición 13 Superior dice que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, de modo que recibirán la misma protección de las autoridades. Y así mismo, el Estado promoverá derechos, libertades y oportunidades con igualdad real y efectiva.

Lo expresado son disposiciones propias de un Estado Social de Derecho, así pues, es lógico que la Constitución colombiana contenga todo un discurso político-jurídico que aspire a valorar la vida, la igualdad, la libertad y los derechos fundamentales de sus ciudadanos, pues en últimas la visión y misión de un Estado es que sus asociados experimenten la paz, la convivencia pacífica y la realización de sus proyectos de vida por medio de oportunidades reales.

Pero, como se sabe, los seres humanos somos seres complejos, mas no ideales, por ello incurrimos en errores o lesionamos la ley. Sin embargo, la Constitución dice que todos somos iguales ante ley, es decir que aun cuando se incurra en equívocos o yerros sociales de tránsito penal, la norma de norma que es la Carta magna no difiere que se deben seguir protegiendo los derechos de todos sus ciudadanos, y en ese orden existe el artículo 28 constitucional que entre otras cosas prescribe que “la persona detenida previamente será puesta a disposición del juez competente dentro de las 36 horas siguientes”.

En el sentido de la garantía de libertad que debe tener toda persona (Artículo 28 Constitucional) y las oportunidades reales que debe ofrecer el Estado como garante de derechos y deberes, surgen

EL DERECHO A LA REDENCIÓN DE LA PENA

mecanismos jurídicos como el derecho de redención que está en caminado a reconocer compensaciones de libertad, sin evadir la sanción penal, cuando esta muestra cambios actitudinales y éticos para llegar a hacer y ser un buen ciudadano al momento de reinsertarse a la sociedad.

Y así unido a la redención, surge el mecanismo de la resocialización, que como se ha dicho extensamente, en el cual, a través de diversos programas de educación, culturales, trabajo y demás estrategias, se busca reeducar al ciudadano que ha incurrido en un delito para que reoriente su vida, y de tal manera aporte a la paz, al progreso social y a la familia.

El derecho de redención y los programas de resocialización tienen un desarrollo legal amplio a través de la Ley 65 y otras normas que la han modificado y complementado. Así mismo, la jurisprudencia ha dado un desarrollo pertinente en pro de aclarar conceptos, figuras y ofrecer sugerencias. De tal modo, se puede decir que Colombia posee formalmente todo un engranaje jurídico en relación a la redención que otorga a las autoridades herramientas, en el caso del Inpec, para dar aplicabilidad en beneficios de los reos, y en efecto, a la política pública criminal del país.

Se puede decir, que la redención es un mecanismo que tiene mucho sentido que exista en el contexto actual colombiano. La constitución de 1991 que ya tiene más de 20 años, bautiza a Colombia como un Estado Social de Derecho, y como Estado se deben garantizar derechos esenciales como la vida, la paz, la libertad y la solidaridad; y la redención responde muy acorde a esas garantías ciudadanas. Otro aspecto que le da sentido a la vigencia del derecho de redención es el proceso de paz que firmó el gobierno de Juan Manuel Santos con las Farc-ep y, desde ya hace más tiempo en el Gobierno de Uribe Vélez con los paramilitares. Esa idea de reinsertar a los hombres y mujeres perteneciente a estos grupos a una nueva realidad social y de trabajo con penas adecuadas a lo acordado en cada negociación; además al acceso de beneficios educativos y otros, es el ejercicio pleno formal de la resocialización como sentido de garantizar la armonía social y política, de tal forma se disminuya

EL DERECHO A LA REDENCIÓN DE LA PENA

el crimen y reine la paz nacional. Todo esto está lejos a la vendetta socia y estatal, sino que se mueve a la reconciliación y la generación de desarrollo económico, político, cultural, agrario y tecnológico.

La redención, es entonces, un derecho pertinente para un país que constantemente e históricamente ha buscado superar periodos de violencia tanto rural como urbana, además de la visión de superar la desigualdad, la inequidad y las grandes brechas sociales. Por ello, la redención es un mecanismo que necesita que otros elementos de la política pública funcionen como es el empleo, apoyo al emprendimiento, garantía a acceso a la salud, vivienda y otros asuntos esenciales para la vida convivencial y comunitaria nacional.

Sin embargo, en la práctica diaria o realidad social de las cárceles en Colombia el ejercicio del derecho de redención y los programas de resocialización no se llevan a cabo de la manera más esperada. Pues se enfrentan a problemas complejos como la falta de garantía de derechos esenciales en escenario carcelario, el hacinamiento, falta de fortalecimiento de algunos programas educativos, violencia interna, drogadicción, ejercicio delictivo, entre otros agentes negativos que la Corte Constitucional ha advertido por su gravedad y urgente de solución.

El estado de cosas inconstitucionales es un agente negativo para el desarrollo adecuado del derecho de resocialización y garantía de los derechos fundamentales en las cárceles de Colombia. Como se mencionó en un aparte previo, el derecho de redención y la resocialización misma depende mucho de la asegurabilidad de la prestación de otros servicios y goces de derechos. Esa asegurabilidad es débil pues como lo ha evidenciado la Corte Constitucional desde 1998:

Toda cárcel tiene esas carencias. Ninguna satisface todas las necesidades en los servicios públicos de agua y algunos problemas de luz. En la Modelo, el servicio de agua es inadecuado, es insuficiente. El alcantarillado es regular. La gente tiene que soportar malos olores. Ellos

EL DERECHO A LA REDENCIÓN DE LA PENA

adquieren una inmunidad. En los túneles hay unos olores horribles y ahí viven internos.

Entonces los servicios públicos son insuficientes y más aún para el número de internos. La pulgada de agua no está programada para esa cantidad (T-153 de 1998).

En lo específico de lo que revela la Corte es importante es muy importante pues se está hablando de una garantía básica como es el agua, y esa vulneración redundante a una incoherencia, la cual consiste, y que ya se dijo en su momento, entre lo que consigna la filosofía de la redención y la resocialización, y lo que realmente pasa negativamente en las cárceles. Esto es, no educa bien un programa del Estado que pretende resocializar a los ciudadanos cuando estos están experimentando tratos indignos a su persona y su supervivencia.

Para la época de la sentencia referenciada estipula unas sugerencias claves para superar esos problemas estructurales de garantía de derecho y un mejor ejercicio de la resocialización entre estas sugerencias están: a) ampliar las planta de guardia en los centro de reclusión, esto genera que se pospongan acompañamientos a citas médicas u otras diligencias judiciales, b) construir más cárceles con calidad para reducir y eliminar el hacinamiento y c) mejores procedimientos y accesos para garantizar la concesión de subrogados penales para aquellos reos que cumplen buenas conductas (ibídem). Estas sugerencias han sido importantes, aunque no se han cumplido a toda cabalidad porque hoy en día aún persisten problemas de hacinamiento, por ejemplo:

La mayoría de las cárceles presentan celdas colectivas y no siempre se toma como norma estandarizada los 3.5 m² por individuo y sus respectivos 3 m³ de aire en clima frío o 4 en clima cálido (Ibídem).

La Corte ha reconocido la importancia de la resocialización en los centros penitenciarios, pero también, desde 1998 ha destacado la correlación entre garantías de derechos vinculados a la dignidad humana y tal propósito resocializador. Por ello dice que “Del derecho a la dignidad y del

EL DERECHO A LA REDENCIÓN DE LA PENA

concepto de Estado social de derecho, se deduce el derecho de los reclusos a contar con centros carcelarios que les garanticen la posibilidad de reinserirse en la sociedad” (Ibídem), y tal lógica se cumple siendo eficientes con acceso a servicios dignos, honor a la honra y a los no tratos crueles de ninguna forma. Doble pregunta que surge entonces es ¿Las cárceles de Colombia en su mayoría están cumpliendo con la función esencial de la resocialización y todo lo que tiene que ver con garantías de derecho? La Corte dando respuesta, advierte que se debe trabajar mucha más para que se dé un impacto material y real sobre esta misión del Estado a través de sus instituciones competentes.

Por otro lado, la desocialización no puede generarse en los centros penitenciarios en ninguna forma. Es decir, no se le debe prohibir a los presos los derechos que normalmente tiene un ciudadano no detenido, en efecto, cuando a los presidiarios no les impide tener goces de derecho como acceso al agua potable, adecuados espacios para dormir, garantía de procedimiento de los jueces en el manejo de su derecho de redención, entre otros se contradice el fin resocializador de la pena, pues:

La resocialización se opone, frente a todo, a penas y condiciones de cumplimiento que sean en esencia, por su duración o sus consecuencias, desocializadoras. El Estado debe brindar los medios y las condiciones para no acentuar la desocialización del penado y posibilitar sus opciones de socialización. (C-261 de 1996).

Todo lo anterior, obviamente está inherente a la política criminal del país que encabeza por la Fiscalía General de la Nación y el Congreso de la Republica. Pues una política criminal que sea sólo enfocada en lo represivo, castigador y lejos de una material herramienta resocializadora va en contradicción con toda la misión del Estado Social de derecho. Por ello, es importante que la política criminal propenda por ser humanizada, más no laxa, en la corrección de ciudadano que

EL DERECHO A LA REDENCIÓN DE LA PENA

delinque. Es decir, es aspirar que este sea capaz de insertarse útilmente a la sociedad, pero esto lo hace el Estado, haciendo sentir valioso a ese ciudadano dándole un trato respetuoso de su dignidad humana desde las distintas dimensiones; y así, ser coherente con dicho en los programas de redención y resocialización.

Además de lo dicho, las instituciones penales deben tener un seguimiento real y serio sobre los tipos de presos que tienen, cuales son los avances en su política y programas de resocialización. En su preocupación ha dicho la Corte Constitucional:

[...] es urgente cumplir el deber de consolidar sistemas de información serios, confiables y articulados, que permitan la evaluación y la retroalimentación de las medidas adoptadas en cada etapa de la política pública. Así mismo es necesario lograr unidad y calidad en la información delincuencial y penal (T-762 de 2015).

Sin los elementos básicos como los dichos por la suprema institución constitucional, es difícil que el Estado colombiano le dé una respuesta contundente a la delincuencia, pero, además, emitir programas estructurales que le permitan resocializar de manera eficiente a sus reos, y de tal manera tenga más sentido toda la filosofía de la redención como derecho que busca garantizar la libertad unida a la paz y a la armonía de la convivencia social. Pues no tiene ningún sentido tener las cárceles llenas de presos sin seguimiento y evaluación de sus comportamientos, y que no haya un plan claro de cómo reformar esos comportamientos. Sería entonces un fracaso que los reos al salir de las cárceles, lo hagan siendo peores personas desde el enfoque moral, ético y social.

No es desacertada la Corte Constitucional al exhortar a las entidades como el Ministerio de justicia y del derecho, en articulación con el Sena, el Ministerio de Educación y el DANE para que se realice un estudio sobre las necesidades que se deben suplir en los programas de resocialización

EL DERECHO A LA REDENCIÓN DE LA PENA

para mejorar su eficiencia, eficacia y efectividad, y así, consolidarlos en el país, además de cubrir necesidades particulares de cada región (T-762 de 2015). Este pronunciamiento es muy disiente sobre los vacíos y debilidades que ha tenido el programa resocializador en Colombia, y la función de la redención, por ello, la Corte convoca a que se mejore desde la integralidad y diferenciabilidad regional.

En fin, queda demostrado que la vigencia de la redención como derecho y de la resocialización como mecanismo para alcanzar la reinserción efectiva, desde lo formal tiene un desarrollo importante, sin embargo, desde su practicidad y materialidad hay trabajo por hacer, por mejorar como lo han dicho distintos autores y la Corte Constitucional en sus estudios. De modo que, en Colombia no debe desaparecer el derecho de redención, sino que debe ser fortalecido cada vez más con seriedad, seguimiento robusto y capacitación del recurso humano para su excelente ejecución, y esto último referido desde los guardas hasta los jueces.

Las resocializaciones necesitan ser más diferenciales y adaptadas a las necesidades propias de la ciudad, clase de presos, tipos de delitos y relacionadas con la personalidad de los reos. Como dijo la Corte, se debe propender por la integralidad, es decir, que se reeduke varias dimensiones del humano desde su actitud frente a la vida y los respetos por los derechos de los demás. Así mismo, debe ofrecerse programas que tengan mucho sentido en la vida de los ciudadanos privados de la libertad, no programas aburridores y desarticulados de la realidad nacional.

Otro aspecto clave es la garantía de acceso a los reclusos en los programas de resocialización. Esto debe comenzar desde la socialización clara, exhaustiva y dinámica. A parte de ello, contar con el personal suficiente para la consecución de dichos programas, además de acceso a materiales y recursos propio para el desarrollo de las actividades. Para esto, no se debería esperar que se extinga el hacinamiento, sino desde ahora buscar las estrategias viables para brindar acceso a la mayoría de

EL DERECHO A LA REDENCIÓN DE LA PENA

los reos sin lastimar en lo posible la salud y vida del personal humano que trabaje como agentes protagónicos en las diversas actividades.

Y en última algo importante, conexo a la resocialización y redención, es redoblar el esfuerzo porque desaparezca progresivamente el hacinamiento carcelario, la violencia, la extorsión y todo ese escenario de ilegalidad de las cárceles. Como también debe desaparecer la vulneración de derechos humanos y de los derechos fundamentales por parte del Estado, y de los presidiarios entre ellos. La mejoría de los servicios públicos también debe ser una prioridad, para que todo comience a generar confianza entre los reos y sus cuidadores; más aún hoy que se enfrenta el mundo a una pandemia por el Covid-19 donde la sanidad es fundamental. Todo esto debe estar acorde para mejorar el discurso de Estado social de derecho, y al engramado filosófico y político de la redención y la resocialización.

Conclusiones

Dada la disertación expuesta a lo largo del trabajo de investigación con soporte de distintas fuentes se puede llegar a las siguientes conclusiones respecto al derecho de redención y la resocialización en Colombia.

- 1) La materialización del derecho de redención debe fortalecerse en la garantía de su aplicación y su manejo institucional desde los jueces y todo el aparato judicial para que haya un ejercicio significativo en su impacto positivo frente a la política criminal del país, y no sea un comodín para obviar las sanciones penales por parte de los presidiarios.
- 2) Los programas de resocialización deben ser robustecidos para que respondan a su función de reeducar a las personas privadas de la libertad. En ese orden de ideas, los diversos programas deben aterrizar a la realidad social, política y económica del país, pero además realizar un verdadero intento por la formación ética y ciudadana del reo.
- 3) La política criminal del país debe ser más coherente con la idea de Estado social de derecho, por tanto, debe comenzar a disminuir progresivamente la vulneración de los derechos humanos y de los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad.
- 4) El estado de cosas inconstitucional debe eliminarse de las cárceles del país, y de la nación en general, para que tenga una mejor fortaleza una política criminal enfocada en el respeto de la dignidad humana y el respeto por los derechos. Y de tal manera, haya congruencia entre la realidad y el objetivo de la redención y la resocialización en la vida de los reclusos; y en última la gran beneficiaria sea la sociedad por la construcción de la paz y reducción de

EL DERECHO A LA REDENCIÓN DE LA PENA

los actos criminales. Sin la desaparición considerable del estado de cosas inconstitucionales la resocialización no tendrá un impacto a grandes rasgos en Colombia.

- 5) La no reincidencia de los reclusos garantiza una sociedad encaminada a la paz, la armonía y la solidaridad, por ello la resocialización debe ser un mecanismo fuerte, con seguimiento constante y evaluación recurrente para adoptar mejoras en su ejecución.
- 6) Colombia, luego de entrar en el proceso de paz, independiente de que haya un tribunal espacial para la paz; el sistema ordinario debe propender de aprender por alinear la política criminal en la reconciliación y la construcción de un país lleno de oportunidades y competente en económicamente apoyando el emprendimiento y las empresas alternativas; además de fortalecer el empleo forma.

EL DERECHO A LA REDENCIÓN DE LA PENA

Referencias

- Abadías Arias y Cardona Salazar (2011) Valoración del impacto de los programas de resocialización en los internos de la cárcel de varones de Manizales. [Tesis de grado para optar título de abogada] Universidad de Manizales. Recuperado de: https://ridum.umanizales.edu.co/xmlui/bitstream/handle/20.500.12746/89/140_365.66_A140.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Álvarez Rojas y Micahán Ruiz (2018) El trabajo penitenciario en Colombia y su impacto en la reinserción social y laboral. [Tesis de maestría programa Estudios y Gestión del Desarrollo] Universidad del Valle. Recuperado de: https://ciencia.lasalle.edu.co/cgi/viewcontent.cgi?article=1129&context=maest_gestion_desarrollo
- Aristizabal, J. et al, (2019) Informe de Derechos Humanos del Sistema Penitenciario en Colombia 2017-2018. *Grupo de presiones*, (5). Pp. 1-43. Recuperado de: <https://grupodeprisiones.uniandes.edu.co/images/2019/GrupoPrisiones.InformeDDHH2018.pdf>
- Baena, G. (2017). *Metodología de la investigación*. Grupo Editorial Patria.
- Bernal Pulido (2015) Derechos fundamentales. *Instituto de Investigaciones jurídicas* (pp.1571-1592) Universidad Autónoma de México. Recuperado de: <https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3796/24.pdf>.
- Cano Murillo, L. (24-04-2020). Se está incubando un genocidio en las cárceles de Colombia. Encontrado en: <https://pares.com.co/2020/04/24/se-esta-incubando-un-genocidio-en-las-carceles-de-colombia/>

EL DERECHO A LA REDENCIÓN DE LA PENA

- Carreño Martínez (2016) *Las cárceles como espacios de violación a los derechos humanos, estudio de caso: cárcel modelo de Bogotá 2002-2010*. [Tesis de grado para optar título de politólogo] Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Recuperado de: <https://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/12488/1026266103-2016.pdf?sequence=1>
- Carrillo Bohórquez (2016) *El derecho a la redención de la pena en el Sistema Penal colombiano*. [Tesis de grado para optar título de derecho] Universidad católica de Colombia. Recuperado de: <https://repository.ucatolica.edu.co/handle/10983/13755>
- Cote Villamizar y Peña (2016) *Acciones jurídicas aplicables para disminuir el hacinamiento de internos en el centro penitenciario de mediana seguridad de Cúcuta* [Tesis de grado para optar título de abogado] Universidad Libre de Colombia. Recuperado de: <https://repository.unilibre.edu.co/handle/10901/9675>
- El proceso de investigación, Carlos sabino*. (02 de 2008). Obtenido de método de investigación: https://metodoinvestigacion.files.wordpress.com/2008/02/el-proceso-de-investigacion_carlos-sabino.pdf
- Fajardo Sánchez, L. (2018). Derechos Humanos de Personas Privadas de la Libertad en Colombia. *Revista Republicana*, (24). Recuperado de: <http://ojs.urepublicana.edu.co/index.php/revistarepublicana/article/view/452>
- Ferrajoli, L. (2006) Sobre los derechos fundamentales. *Cuestiones constitucionales*. (15) pp. 113-136. Recuperado de: <https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/cuestiones-constitucionales/article/view/5772/7600>.

EL DERECHO A LA REDENCIÓN DE LA PENA

- Gil Ruiz y Peralta Ovalle (2015) *La dignidad humana dentro de los centros carcelarios y penitenciarios de Colombia* [tesis de grado especialista en derecho procesal penal constitucional y justicia militar] Universidad Militar Nueva Granada. Recuperado de: <https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/13896/ARTICULO%20LA%20DIGNIDAD%20HUMANA%20DENTRO%20DE%20LOS%20CENTROS%20CARCELARIOS%20Y%20PENITENCIARIOS%20DE%20COLOMBIA.pdf?sequence=2&isAllowed=y>
- Goldstein, M. (2010) *Diccionario Jurídico*. Buenos Aires, Argentina: Circulo Latino Austral.
- Hernández (2012). La prisión, reseña histórica y conceptual. Recuperado de: <file:///D:/HP.DESKTOP-ALA7C78/Downloads/DialnetBreveResenaHistoricaYConceptualDeLaPrision-4216857.pdf>
- Hernández, J. S. (24 de abril de 2019). *Las cárceles colombianas: el fracaso de las políticas del garrote*. Obtenido de De justicia: <https://www.dejusticia.org/las-carceles-colombianas-el-fracaso-de-las-po>
- Hernández Jiménez, N. (2018) El fracaso de la resocialización en Colombia. *Revista de Derecho*. (49) pp. 1-41. Recuperado de: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6987737>
- Hernández Sampieri, R. (2014). Metodología De La Investigación 6º Edición. Recuperado de: <http://observatorio.epacartagena.gov.co/wp-content/uploads/2017/08/metodologia-de-la-investigacion-sexta-edicion.compressed.pdf>.
- Checa Rivera (2017) El sistema penitenciario. Orígenes y evolución histórica [Trabajo de grado para optar master Universitario en acceso a la profesión de abogado] Universidad de Alcalá.

EL DERECHO A LA REDENCIÓN DE LA PENA

Recuperado

de:

<https://ebuah.uah.es/dspace/bitstream/handle/10017/31992/TFM%20NATALIA%20CHECA%20RIVERA.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Carrillo de la Rosa, Y., & Bechara Llanos, A. (2019). Juez discrecional y garantismo: Facultades de disposición del litigio en el Código General del Proceso. JURÍDICAS CUC, 15(1), 229-262. <https://doi.org/10.17981/juridcuc.15.1.2019.09>

Kooyman, E. (21-03-2018) Cárceles en Colombia: una situación insostenible. ICR Recuperado de: <https://www.icrc.org/es/document/carceles-en-colombia-una-situacion-insostenible>

López Melero, M. (2015) Los derechos fundamentales civiles y sociales de los internos en centros penitenciarios y su libertad. *Anuario facultad de derecho* 28 (1). Pp. 158-186. Recuperado de: https://ebuah.uah.es/dspace/bitstream/handle/10017/24218/derechos_lopez_AFDUA_2015.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Portela, J. (2020). El Derecho en tiempos de crisis. JURÍDICAS CUC, 16(1), 269–286. <https://doi.org/10.17981/juridcuc.16.1.2020.11>

Rodríguez, (2016). Aplicabilidad derecho redención. Recuperado de: http://bibliotecadigital.usbcali.edu.co/bitstream/10819/4862/1/aplicabilidad_derecho_redencion_molano_2016.pdf

EL DERECHO A LA REDENCIÓN DE LA PENA

Sabino, C. (02 -2008). El proceso de investigación: método de investigación. Recuperado de:

https://metodoinvestigacion.files.wordpress.com/2008/02/el-proceso-de-investigacion_carlos-sabino.pdf

Sagastume Gemmell, M. (1991) ¿Qué son los Derechos Humanos? Evolución histórica.

Organización de Naciones Unida. Guatemala. Recuperado de:

<https://www.corteidh.or.cr/tablas/15872r.pdf>

Sancha Diez (2017) Derechos fundamentales de los reclusos. [Tesis doctoral en derecho]

Universidad Nacional de Educación a Distancia. Recuperado de: [http://e-](http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/tesisuned:Derecho-Jpsancha/SANCHA_DIEZ_JosePablo_Tesis.pdf)

[spacio.uned.es/fez/eserv/tesisuned:Derecho-](http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/tesisuned:Derecho-Jpsancha/SANCHA_DIEZ_JosePablo_Tesis.pdf)

[Jpsancha/SANCHA_DIEZ_JosePablo_Tesis.pdf](http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/tesisuned:Derecho-Jpsancha/SANCHA_DIEZ_JosePablo_Tesis.pdf)

Paces Barca, G. (s/f) Derechos fundamentales. (pp 7-24) Universidad Complutense. Recuperado

de: [https://e-](https://e-archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/10462/derechos_Feces_RJCM_1987.pdf;jsessionid=76B0F5C68D28BF34FEE883224D698FD8?sequence=1)

[archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/10462/derechos_Feces_RJCM_1987.pdf;jsessio](https://e-archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/10462/derechos_Feces_RJCM_1987.pdf;jsessionid=76B0F5C68D28BF34FEE883224D698FD8?sequence=1)

[nid=76B0F5C68D28BF34FEE883224D698FD8?sequence=1](https://e-archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/10462/derechos_Feces_RJCM_1987.pdf;jsessionid=76B0F5C68D28BF34FEE883224D698FD8?sequence=1)

Pachón Castillo (2014) *Del Derecho Fundamental a la Intimidad en Establecimientos Carcelarios:*

Un Estudio Jurisprudencial Constitucional sobre la Violación a este derecho [tesis de

grado para optar título de abogada] Universidad Católica de Colombia. Recuperado de:

[https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/2591/1/Derecho-fundamental-](https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/2591/1/Derecho-fundamental-intimidad-en-establecimientos-carcelarios.pdf)

[intimidad-en-establecimientos-carcelarios.pdf](https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/2591/1/Derecho-fundamental-intimidad-en-establecimientos-carcelarios.pdf)

Pardo González (2018) Políticas públicas y derechos humanos en las cárceles colombianas.

[Artículo para optar título de abogado] Universidad Católica de Colombia. Pp.1-37.

EL DERECHO A LA REDENCIÓN DE LA PENA

Recuperado

de:

<https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/17366/1/POL%C3%8DTICAS%20P%C3%9ABLICAS%20Y%20DERECHOS%20HUMANOS%20EN%20LAS%20C%C3%81RCELES%20COLOMBIANAS.pdf>

Bechara Llanos, A. (2018). Investigación-acción-jurídica: escenarios para una investigación activa y crítica en el Derecho. *JURÍDICAS CUC*, 14(1), 211-232. <https://doi.org/10.17981/juridcuc.14.1.2018.10>

Preciado Burgos, V. (2020) Educación o resocialización: Problemática abordada desde la administración penitenciaria en Colombia. *Utopía y Praxis Latinoamericana*. 25 (3). Pp. 139-152. Recuperado de: <https://www.redalyc.org/journal/279/27963600011/>

Posada Segura (2010) Derechos de los reclusos en los pronunciamientos judiciales. *Grupo de investigación Sistema penitenciario*. Universidad de Antioquia. Recuperado de: <mailto:https://corteidh.or.cr/tablas/r26279.pdf> pp. 221-226.

Meza, A., Arrieta, M., & Noli, S. (2018). Análisis de la conciliación extrajudicial civil en la Costa Atlántica colombiana. *JURÍDICAS CUC*, 14(1), 187-210. <https://doi.org/10.17981/juridcuc.14.1.2018.09>

Posada Segura, J. D. y Guardia López, C. L. (2021). Cárcel legal y Cárcel real: una mirada a los derechos fundamentales de los reclusos en el municipio de Segovia (Antioquia). *Estudios de Derecho*, 78 (171), 319-351. Recuperado de: [DOI: 10.17533/udea.esde.v78n171a13](https://doi.org/10.17533/udea.esde.v78n171a13)

EL DERECHO A LA REDENCIÓN DE LA PENA

Villar Borda (2016) Estado de derecho y Estado social de Derecho. *Revista Derecho del Estado*.

(20), pp. 73-96. Recuperado de:

<https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/derest/article/view/705/667>

Arrieta-López, M. (2020). From Peace and The Planetary Republics of the Century of Lights to the

Materialization of Perpetual Peace and Universal Citizenship. / De la paz y las repúblicas

planetarias del siglo de las luces a la materialización de la paz perpetua y la ciudadanía

universal. *Utopía Y Praxis Latinoamericana*, 25, 473-488. Recuperado a partir

de <https://produccioncientificaluz.org/index.php/utopia/article/view/34534>

Zysman Quirós, D. (2010) Justificación del castigo e inflación penal. Universidad de Palermo.

Recuperado de: [https://www.palermo.edu/Archivos_content/derecho/pdf/Justificacion-](https://www.palermo.edu/Archivos_content/derecho/pdf/Justificacion-del-castigo-e-inflacion-penal-Prof-Zysman-Quiros.pdf)

[del-castigo-e-inflacion-penal-Prof-Zysman-Quiros.pdf](https://www.palermo.edu/Archivos_content/derecho/pdf/Justificacion-del-castigo-e-inflacion-penal-Prof-Zysman-Quiros.pdf)

EL DERECHO A LA REDENCIÓN DE LA PENA

Normatividad

Declaración de los Derechos Humanos, Organización de las Naciones Unida.

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Organización de las Naciones Unida.

Convención Americana de los Derechos Humanos, San José de Costa Rica, 1969.

Constitución Política de Colombia de 1991, Congreso de la República.

Ley 65 de 1992, Congreso de la República.

Ley 115 del 1994, Congreso de la República de Colombia

Ley 599 de 2000, Congreso de la República.

Ley 1064 de 2006, Congreso de la República.

Ley 1098 de 2006, Congreso de la República.

Ley 1142 de 2007, Congreso de la República.

Ley 1709 de 2014, Congreso de la República.

Decreto 177 de 2008, Congreso de la República.

Decreto 4904 de 2009. Congreso de la República.

Resolución 003190 de 2013

Resolución 13824 de 2007

Resolución 2392 de 2006

EL DERECHO A LA REDENCIÓN DE LA PENA

Jurisprudencial

Corte Constitucional. Sentencia. T-406 de 1992. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

Corte Constitucional. Sentencia. C-394 de 1995. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.

Corte Constitucional. Sentencia. C-261 de 1996. M.P. Alejandro Martínez Caballero.

Corte Constitucional. Sentencia. T-153 de 1998. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

Corte Constitucional. Sentencia. SU-090 de 2000. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

Corte Constitucional. Sentencia. T-429 de 2010. M.P. Juan Carlos Henao Pérez.

Corte Suprema de Justicia. Sentencia. 35767 de 2012. M.P. José Busto Martínez.

Corte Constitucional. Sentencia. T-388 de 2013. M.P. María Victoria Calle Correa.

Corte Constitucional. Sentencia. T-448 de 2014. M.P. Mauricio González Cuervo.

Corte Constitucional. Sentencia. T-762 de 2015. M.P. María Victoria Calle Correa.

Corte Constitucional. Sentencia. T-718 de 2015. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.

Corte Constitucional. Sentencia. T-603 de 2017. M.P. José Fernando Reyes Cuartas.

Corte Constitucional. Sentencia. T-100 de 2018. M.P. María Victoria Calle Correa.

Corte Constitucional. Sentencia. T-498 de 2019. M.P. José Fernando Reyes Cuartas.